Fundación Sin Límites

France

AMBASSADE DE FRANCE AU COSTA RICA
Liberté
Égalité
Fraternité



Diagnóstico Socioeconómico de Mujeres Migrantes en el Cantón de La Cruz

Septiembre 2026

Cita sugerida

Ramírez Moncada, K., Aguilar Aguilar, A., y Munguía, T. (2026). *Diagnóstico Socioeconómico de Mujeres Migrantes en el Cantón de La Cruz*. www.fsinlimites.com/2026/09/30/diagnostico-socioeconomico-de-mujeres-migrantes-en-el-canton-de-la-cruz/

Esta investigación se realizó con el apoyo de la Embajada de Francia en Costa Rica, en el marco del Fondo Equipo Francia para las Organizaciones de la Sociedad Civil (FEF-OSC).

Este informe se encuentra disponible en versión pdf en la dirección: www.fsinlimites.com

La información publicada puede compartirse siempre y cuando se atribuya debidamente su autoría, sea sin fines de lucro y sin obras derivadas. Se prohíbe cualquier forma de reproducción total o parcial, sea cual fuere el medio, sin el consentimiento expreso y por escrito de Fundación Sin Límites.

Las opiniones expresadas en la presente publicación son responsabilidad exclusiva de Fundación Sin Límites y no reflejan necesariamente las de ninguno de sus socios.

Contenido

Siglas y acrónimos 4
Resumen Ejecutivo 5
Introducción 5
Marco teórico 6
Marco metodológico 7
Resultados del diagnóstico 8
Conclusiones y recomendaciones 14
1. Introducción 15
1.1. Objetivo general 16
1.2. Objetivo específico 16
2. Marco teórico 16
2.1. Economía del cuidado en la migración 16
2.2. Oportunidades para mujeres migrantes 18
3. Marco metodológico 19
3.1. Enfoque de investigación 19
3.2. Recolección de los datos 19
3.3. Análisis de la información 20
3.4. Limitaciones de la investigación 20
4. Resultados del diagnóstico 21
4.1 Perfil socioeconómico y trayectoria laboral de las mujeres migrantes 21
4.2 Barreras de acceso al empleo formal y al emprendimiento 24
4.3 Responsabilidades de cuido y su relación con la inserción económica 26
4.4 Capacidades, saberes y potencial productivo no aprovechado 28
4.5 Oportunidades económicas y sectores con potencial en el territorio 31
4.6 Oferta formativa existente y brechas de capacitación 34
4.7 Perspectiva institucionales: redes y actores clave 39
5. Conclusiones y recomendaciones 47
Recomendaciones 48
Referencias 50

Siglas y acrónimos

ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ASCATUR	Asociación Cámara de Turismo de La Cruz
BCCR	Banco Central de Costa Rica
CAF	Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe
CCSS	Caja Costarricense de Seguro Social
CEN	Centro de Educación y Nutrición
CINAI	Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral
CENCE	Centro de Educación y Nutrición y Comedor Escolar
CICOM-UCR	Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Costa Rica
CMM	Centro Municipal para Migrantes
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería
ICN	Índice de Competitividad Cantonal
IMAS	Instituto Mixto de Ayuda Social
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje
INAMU	Instituto Nacional de las Mujeres
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
MEP	Ministerio de Educación Pública
MICITT	Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU Mujeres	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
PANI	Patronato Nacional de la Infancia
PIB	Producto Interno Bruto
REDCUDI	Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Resumen Ejecutivo

Introducción

El cantón de La Cruz, en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, es uno de los principales puntos de tránsito para la población migrante y refugiada del país; su población pasó de 22.171 habitantes en 2010 a 29.512 en 2025 (INEC). Esta condición fronteriza configura un territorio con dinámicas socioeconómicas particulares y limitaciones estructurales de acceso al empleo formal, la formación técnica y el emprendimiento. Las mujeres migrantes que residen en el cantón enfrentan barreras derivadas de la intersección entre su condición migratoria, el género y las dinámicas económicas locales, entre ellas la falta de reconocimiento de sus trayectorias laborales previas, las restricciones normativas para la regularización migratoria y las responsabilidades de cuidado no remunerado.

El objetivo general del diagnóstico es iidentificar las capacidades productivas a partir de la trayectoria laboral y las brechas de acceso a oportunidades socioeconómicas de las mujeres migrantes en el cantón de La Cruz.

Este diagnóstico, elaborado por el equipo de investigación de Fundación Sin Límites con el apoyo de la Embajada de Francia a través del Fondo de Apoyo a la Integración de Mujeres y Niñas Migrantes en la Sociedad Costarricense, tiene como objetivo identificar las capacidades productivas derivadas de la trayectoria laboral de las mujeres migrantes en La Cruz, así como las brechas que limitan su acceso a oportunidades socioeconómicas. Sus hallazgos constituirán un insumo clave para el diseño de un plan de formación dirigido a esta población.

Marco teórico

El marco teórico se sustenta en dos enfoques complementarios. Por un lado, la Economía Feminista, a través de los aportes de Rodríguez Enríquez (2012, 2015), permite visibilizar el trabajo de cuidado como una dimensión central para comprender la economía y la posición diferenciada de mujeres y hombres como agentes económicos. Esta perspectiva evidencia cómo la feminización del cuidado se extiende del ámbito doméstico al mercado laboral remunerado, traduciéndose en la sobrerrepresentación de mujeres incluyendo migrantes en sectores como el servicio doméstico, la salud y la educación, independientemente de su nivel educativo u ocupación previa en su país de origen, patrón que se observa también en otros flujos migratorios similares, como el de ecuatorianas y colombianas hacia España, peruanas hacia Chile y España, paraguayas hacia Argentina, y nicaragüenses hacia Costa Rica (Esquivel, 2012). Vásconez (2012) complementa este análisis al señalar que las cadenas globales de cuidado también implican beneficios económicos para los países de destino, derivados de la reducción del costo de oportunidad cuando el trabajo de cuidado se sustituye por trabajo migrante.

Por otro lado, el enfoque de las capacidades de Nussbaum (2000) aporta herramientas para entender cómo se generan oportunidades reales, distinguiendo entre capacidades básicas, internas y combinadas estas últimas entendidas como la combinación de capacidades internas y condiciones externas que permiten ejercerlas efectivamente. Esta distinción resulta clave porque una persona puede poseer las destrezas necesarias para trabajar y, aun así, verse impedida de hacerlo por presiones de su entorno (familiares o religiosas, según ilustra la autora). Nussbaum incluye el trabajo dentro de las capacidades humanas centrales, señalando el derecho de toda persona a buscar empleo en igualdad de condiciones, no solo de manera formal sino como oportunidad real.

Marco metodológico

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental transversal descriptivo, con el propósito de comprender las trayectorias laborales y las barreras de acceso al empleo de las mujeres migrantes en La Cruz, así como caracterizar las oportunidades económicas del territorio y la oferta formativa disponible. La recolección de información se realizó mediante muestreo no probabilístico, combinando 3 grupos focales (dos presenciales en la Municipalidad y uno virtual) con un total de 18 mujeres migrantes nicaragüenses de entre 24 y 65 años, y 2 entrevistas semiestructuradas a una persona representante de la Municipalidad y una persona experta en procesos migratorios. El análisis se basó en la transcripción y sistematización de la información mediante el software Whisper, organizada en una matriz de Excel según las categorías definidas por los objetivos específicos, y se aplicó un proceso de triangulación entre fuentes primarias y secundarias para aumentar la validez de los resultados.

El estudio presenta dos limitaciones principales. Primero, la totalidad de las participantes son de nacionalidad nicaragüense, lo cual responde a la composición real de la población migrante del cantón, pero implica que los hallazgos no recogen la perspectiva de mujeres de otras nacionalidades ni permiten comparaciones entre distintos colectivos. Segundo, el enfoque exclusivamente cualitativo permitió una comprensión profunda de las trayectorias y barreras percibidas, pero no posibilita cuantificar la magnitud del fenómeno ni generalizar estadísticamente los hallazgos al conjunto de la población migrante del cantón, por lo que la incorporación de un componente cuantitativo (como una encuesta de caracterización socioeconómica) habría permitido complementar y dimensionar estos resultados.

Resultados del diagnóstico

Perfil socioeconómico y trayectoria laboral de las mujeres migrantes

La Cruz se encuentra entre los cantones con mayores rezagos socioeconómicos y de menor desarrollo humano del país, junto con otros territorios fronterizos como Los Chiles, Guatuso y Talamanca (MIDEPLAN, 2024; IMAS, 2024). En este contexto, la trayectoria laboral de las mujeres migrantes nicaragüenses no inicia en Costa Rica: varias participantes trabajaron previamente en actividades textiles, agrícolas o industriales, lo que evidencia un patrón de continuidad en la inserción precarizada, únicamente trasladado de un lado a otro de la frontera. Una vez asentadas en el cantón, sus opciones económicas se concentran en el trabajo agrícola estacional (naranja, café, frijoles), el trabajo doméstico remunerado, la crianza de animales de traspatio, la siembra de granos básicos y la venta ambulante de alimentos; para quienes cuentan con permiso laboral, el sector hotelero constituye la principal fuente de empleo formal identificada por las funcionarias entrevistadas.

Este perfil ocupacional confirma empíricamente lo señalado por la economía feminista latinoamericana: las mujeres migrantes ocupan un segmento acotado del mercado cuidados, servicio doméstico y economía de subsistencia— que la contabilidad económica convencional invisibiliza (Rodríguez Enríquez, 2012; Esquivel, 2012). Un hallazgo relevante es que muchas mujeres inicialmente niegan tener empleo, reconociendo su actividad económica solo cuando la pregunta incluye explícitamente el trabajo por cuenta propia, lo que confirma la interiorización de la brecha entre "trabajo" y "ayuda económica".

En cuanto a la evolución del perfil migrante, las funcionarias entrevistadas destacan como principal cambio institucional la instalación intermitente de una oficina de atención a la población migrante (originada por la OIM y luego asumida con discontinuidad presupuestaria por la Municipalidad). No perciben un cambio drástico en el perfil general, aunque identifican una mayor cualificación educativa en algunas mujeres, que sin embargo tiende a no traducirse en permanencia en el cantón por la falta de empleos calificados, lo que refuerza el patrón de brecha centro-periferia. A esto se suma un patrón de circularidad fronteriza cotidiana (personas que comercializan productos y regresan a Nicaragua el mismo día) y la existencia de un núcleo poblacional más estable, compuesto por mujeres con arraigo familiar previo, algunas con más de 16 a 50 años de residencia en el país.

Barreras de acceso al empleo formal y al emprendimiento

La irregularidad migratoria fue identificada, tanto por las entrevistas institucionales como por los grupos focales, como la barrera más determinante para el acceso al empleo formal, lo que deja al trabajo doméstico como una de las pocas vías disponibles, frecuentemente sin aseguramiento social ni garantías laborales. El costo económico y administrativo de la regularización constituye una barrera de primer orden: la renovación de la cédula de residencia oscila entre 125 y más de 1,425 dólares en casos de naturalización o apostillado, sumado a los gastos de transporte hacia Liberia. Esta situación es consistente con evidencia regional que muestra un menor bienestar financiero de la población migrante debido a barreras de documentación (CAF, 2024).

Un segundo bloque de barreras corresponde a los requisitos administrativos y sanitarios para formalizar emprendimientos (patentes municipales, permisos de salud, infraestructura costosa), lo cual empuja a muchas vendedoras a operar de manera informal o "camuflada". A esto se suma una barrera educativa creciente: los requisitos mínimos de escolaridad tanto para empleos de baja calificación como para cursos del INA han aumentado progresivamente, afectando particularmente a mujeres que migraron sin completar su educación formal. Finalmente, el acceso al crédito representa una barrera crítica: las entidades financieras exigen garantías que las mujeres migrantes no poseen, mientras que la práctica de fiar mercadería a la clientela local inmoviliza su capital de trabajo, un patrón documentado también en otras emprendedoras centroamericanas (ONU Mujeres, 2026). En conjunto, estas barreras reflejan la intersección entre un régimen migratorio restrictivo, una estructura productiva territorial limitada y una arquitectura institucional no diseñada para las condiciones reales de esta población.

Responsabilidades de cuido y su relación con la inserción económica

La sobrecarga de cuidados que enfrentan las mujeres migrantes en La Cruz refleja una desigualdad estructural más amplia: a nivel nacional, las mujeres dedican en promedio 32 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a 16 horas de los hombres (INEC, 2022), brecha que la Política Nacional de Cuidados 2021-2031 busca atender, aunque con implementación aún limitada en territorios fronterizos. Para las mujeres migrantes, esta sobrecarga se agrava por la ausencia de redes de apoyo institucional, que las obliga a resolver el cuidado exclusivamente en el ámbito familiar.

La ausencia de infraestructura de cuido accesible, particularmente en Santa Elena y Santa Cecilia, fue señalada de manera reiterada como el principal obstáculo para acceder a un empleo fuera del hogar: aunque existen CEN-CINAI en localidades

cercanas, el costo del transporte diario resulta inviable frente a los ingresos percibidos. A esto se suma que el acceso a cupos disponibles está condicionado a una valoración del IMAS que exige documentación migratoria al día. Ninguna participante reportó una distribución compartida del cuido con su pareja, lo que confirma una división sexual del trabajo doméstico que recae casi exclusivamente en las mujeres. Como estrategia, las participantes optan por actividades que permiten generar ingresos sin salir del hogar (venta ambulante, costura, crianza de animales), incluyendo la propuesta de organizar turnos rotativos para compartir un local de venta. Ambas funcionarias entrevistadas coinciden en que ninguna estrategia de inserción económica será sostenible sin una respuesta articulada al problema del cuido, para lo cual proponen vincular al PANI, el IMAS y la Municipalidad en torno a un centro de cuido accesible.

Capacidades, saberes y potencial productivo no aprovechado

Las mujeres migrantes poseen una diversidad de conocimientos y habilidades productivas que permanecen subutilizadas, en un contexto regional donde el empleo informal urbano afecta desproporcionadamente a las mujeres migrantes (OIT, 2022), agravado por una brecha digital de género (MICITT y CICOM-UCR, 2017). El principal ámbito de estas capacidades es la elaboración de alimentos —tortillas, pan, repostería, comidas preparadas—, en algunos casos respaldada por certificaciones o experiencia laboral previa. Destaca particularmente el conocimiento en alimentos tradicionales nicaragüenses (nacatamales, buñuelos), que se inscribe en lo que la literatura denomina "economía étnica" o "mercado de la nostalgia" (Solé y Parella, 2005), representando una oportunidad para diversificar la oferta gastronómica del cantón.

Las mujeres también cuentan con experiencia en costura, bordado y manufactura artesanal, así como con redes sociales y comerciales de confianza que han sido clave para el éxito de sus emprendimientos, un factor que la literatura reciente asocia con la permanencia de negocios migrantes incluso por encima del financiamiento formal (Calle García, 2026). Asimismo, poseen competencias digitales básicas (mensajería, videollamadas, redes sociales) que podrían fortalecerse mediante formación en comercio digital. Existe una alta disposición a aprender, lo que indica que la principal limitación no es la motivación sino el acceso a capacitación pertinente.

Un hallazgo significativo es que buena parte de estas capacidades permanece invisibilizada incluso para las propias mujeres, quienes inicialmente niegan tener trabajo pero luego revelan desarrollar múltiples actividades económicas. Esto coincide con la literatura sobre trabajo familiar no remunerado que engrosa artificialmente las cifras de inactividad femenina (Rodríguez Garcés, 2019), reflejando

la persistencia de una división sexual del trabajo que condiciona la valoración social de estas actividades como productivas.

Oportunidades económicas y sectores con potencial en el territorio

La Cruz ocupa el puesto 80 de 82 en el Índice de Competitividad Cantonal 2025, con solo 33.1% de personas de 25 a 34 años con secundaria completa, un desempleo del 13% y apenas 5.6 mujeres empleadas por cada 10 hombres (ICN, 2025). El comercio se ha convertido en el sector con mayor volumen de población ocupada, desplazando a la agricultura, en un contexto de expansión turística marcada por la apertura del complejo Dreams Las Mareas en 2015 (inversión de US$125 millones, 600 empleos directos). Actualmente, el alojamiento representa cerca del 21% del PIB cantonal y el comercio un 11% (BCCR, 2026).

Los actores clave entrevistados coinciden en que el turismo constituye la principal actividad con potencial de empleo formal, y se mencionó la posibilidad de fortalecer la articulación con ASCATUR para ampliar la contratación de mujeres migrantes en hotelería, limpieza y servicios. Sin embargo, el acceso a estos empleos sigue limitado por requisitos administrativos, educativos y por las responsabilidades de cuido que dificultan la adaptación a jornadas extensas o rotativas. La agricultura continúa siendo otra fuente importante de trabajo, aunque marcada por estacionalidad y precariedad. De manera complementaria, se identificaron oportunidades de fortalecimiento en emprendimientos de pequeña escala, particularmente en comida típica nicaragüense (nacatamales, tajadas, rosquillas) y panadería artesanal, actividades con demanda creciente que podrían beneficiarse de procesos de formalización y financiamiento. Finalmente, se mencionó como escenario prospectivo la posibilidad de inversiones industriales en el sector textil, que podrían aprovechar la experiencia previa de muchas mujeres nicaragüenses en maquilas.

Oferta formativa existente y brechas de capacitación

El cantón cuenta con una oferta formativa relativamente diversa, liderada por el INA junto con el IMAS, el INAMU y otras organizaciones, pero esta oferta no se traduce automáticamente en oportunidades efectivas para las mujeres migrantes debido a múltiples barreras de acceso. La mayoría de los cursos del INA exige como mínimo sexto grado de primaria, condición que excluye a mujeres con trayectorias educativas interrumpidas. Las estadísticas del INA (2026) confirman esta limitación: en 2025, solo 4.8% de la población atendida fue migrante y apenas 11% no había completado la secundaria, pese a que el INA cuenta con una Política de Atención a la Población en Desventaja Social. La población atendida presenta una clara subrepresentación de personas con menor escolaridad en comparación con la población nacional (10.7% frente a 34% con primaria completa o incompleta).

Las participantes también señalaron cursos ofrecidos por IMAS, Ayuda en Acción, Fundación Mujer e INAMU, pero identificaron una percepción recurrente de discontinuidad y cupos limitados. Otro hallazgo relevante es el desajuste entre modalidades de enseñanza y condiciones de vida: las mujeres prefieren formación presencial para oficios prácticos, pero enfrentan dificultades de conectividad para cursos virtuales, pese a que el 26.7% de los cursos del INA se imparte en esa modalidad. A pesar de estas brechas, existe una estrecha correspondencia entre los intereses de capacitación de las participantes (repostería, costura, informática, hotelería) y los cursos con mayor matrícula del INA (manipulación de alimentos y servicio al cliente), lo que sugiere que el principal desafío no es la ausencia de oferta, sino su desajuste con las condiciones reales de acceso de esta población.

Perspectivas institucionales: redes y actores clave

La Municipalidad de La Cruz, a través del Centro Municipal para Migrantes (CMM) —creado con apoyo de la OIM ante el aumento de los flujos migratorios derivados de la crisis sociopolítica de Nicaragua—, constituye la institución más importante en la atención a personas migrantes. En 2025, Costa Rica albergaba unas 233,652 personas que necesitaban protección internacional, en su mayoría nicaragüenses (76%) (UNHCR, 2026), y la OIM ha documentado altos volúmenes de movilidad circular en la zona fronteriza (7,786 ingresos regulares en un mes en La Cruz, Upala y Los Chiles). El CMM brinda asesoría migratoria gratuita y referencias a otras instituciones, pero enfrenta el desafío de operar con una sola persona funcionaria, lo que genera sobrecarga de trabajo.

A nivel local, la CCSS, el PANI, el MEP y los CEN-CINAI constituyen las principales instituciones aliadas. La cobertura del convenio CCSS-ACNUR para personas refugiadas ha disminuido drásticamente, de 6,000 personas en 2020 a solo 600 en 2026 (10% de la cobertura inicial). Los tres CEN del cantón (Santa Cecilia, La Garita y Cuajiniquil) se ubican a distancias de 18 a 40 km entre sí, generando una brecha territorial de acceso. A nivel de derivaciones, las oficinas de INAMU e IMAS en Liberia apoyan al cantón mediante consultas y valoraciones de beneficios, aunque su ubicación fuera del territorio limita la inmediatez de la atención. En el plano internacional, la OIM, ACNUR, la Embajada de Francia y el Fons Català han sido actores clave mediante financiamiento y apoyo técnico, incluyendo un estudio de 2025 elaborado por Fundación Sin Límites con financiamiento del Fons Català sobre migración en Upala y La Cruz.

El diagnóstico concluye que la respuesta institucional se sostiene sobre una base estructuralmente limitada: atención concentrada en una sola persona funcionaria, servicios de cuido dispersos territorialmente y dependencia de derivaciones hacia cantones vecinos. Esto evidencia la necesidad de incorporar al sector privado como

actor corresponsable aprovechando el tejido empresarial local vinculado al comercio y la agricultura y de fortalecer a la sociedad civil como puente entre la institucionalidad y la población migrante, superando el alcance actual del comité comunal. La experiencia de las Casas de la Alegría en Coto Brus, una iniciativa binacional impulsada por UNICEF que articuló a CCSS, IMAS, PANI, la municipalidad local y financiamiento de la Embajada de Japón, se presenta como un antecedente positivo de articulación interinstitucional replicable para atender el déficit de cuido identificado en La Cruz.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que la inserción económica de las mujeres migrantes en La Cruz responde a una segmentación estructural del mercado laboral. Así mismo, las mujeres migrantes poseen capacidades productivas relevantes elaboración de alimentos tradicionales nicaragüenses, costura, redes comerciales y competencias digitales básicas que constituyen una base para el desarrollo de emprendimientos, en un territorio que ofrece sectores con potencial de generación de empleo, particularmente el turismo, la agricultura estacional y los pequeños emprendimientos de comida típica.

Aunque La Cruz dispone de una oferta formativa liderada por el INA, esta no logra traducirse en oportunidades efectivas de capacitación para las mujeres migrantes debido a requisitos de escolaridad excluyentes y modalidades de enseñanza poco adaptadas al territorio.

Recomendaciones:

- **Promover modelos de emprendimiento colectivo entre mujeres migrantes:** La Municipalidad de La Cruz, en coordinación con actores de cooperación internacional, debe impulsar la conformación de al menos una asociación o cooperativa de mujeres migrantes emprendedoras.
- **Adecuar la oferta formativa a la realidad de las mujeres migrantes:** El INA debe revisar los requisitos de ingreso relacionados con la escolaridad formal e incorporar cursos modulares, certificaciones por competencias y programas de nivelación educativa.
- **Fortalecer el rol de la sociedad civil y las instituciones locales:** Establecer alianzas entre las OSC de la zona para coordinar intervenciones y fortalecer sus vínculos con las instituciones locales, logrando mayor impacto en la atención a mujeres y niñas migrantes. Asimismo, dar continuidad presupuestaria a la oficina municipal de atención migrante, y desarrollar una encuesta de caracterización socioeconómica.
- **Incorporar al sector privado como actor en la gestión migratoria del cantón:** Se recomienda que la Municipalidad de La Cruz, junto con las instituciones locales, promueva alianzas formales con el tejido empresarial vinculado al comercio, la agricultura y la dinámica fronteriza.

1. Introducción

El cantón de La Cruz, ubicado en la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, constituye uno de los principales puntos de tránsito para la población migrante y refugiada en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población total, del cantón de La Cruz pasó de 22.171 habitantes en 2010 a 29.512 en 2025. Su condición lo hace un territorio con dinámicas socioeconómicas particulares, junto con importantes limitaciones estructurales de acceso al empleo formal, formación técnica y el desarrollo de iniciativas de emprendimiento propias.

El diagnóstico permite tener claridad respecto a la situación de las mujeres migrantes el cantón de La Cruz particularmente sobre las barreras y oportunidades de crecimiento para las mujeres, desde una perspectiva situada. Las mujeres migrantes que residen en el cantón enfrentan barreras derivadas de la intersección entre su condición migratoria, el género y las dinámicas económicas locales. La falta de reconocimiento de trayectorias laborales previas, las restricciones normativas para la regularización de su estatus migratorio y las responsabilidades de cuidado no remunerado son solo algunos de los factores que inciden en su exclusión de oportunidades económicas, como se explicará más adelante en los hallazgos del diagnóstico.

Por ello es importante generar información actualizada, saberes y potencialidades que las mujeres migrantes han desarrollado a lo largo de su trayectoria laboral, tanto en sus países de origen como en Costa Rica. Este diagnóstico es realizado por el equipo de investigación de Fundación Sin Límites, gracias al apoyo de la Embajada de Francia por medio del Fondo *Apoyo a la integración de mujeres y niñas migrantes en la sociedad costarricense.* Los hallazgos permitirán tener insumos pertinentes para la elaboración de un plan de formación que se desarrollará con mujeres migrantes en La Cruz.

En el primer apartado de la investigación se describen los objetivos concretos del estudio, en el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que permite tener una aproximación al objetivo de estudio desde la perspectiva académica y en el tercer capítulo se aborda en marco metodológico que describe como se desarrolló el diagnóstico y cuáles fueron sus principales limitantes.

En el capítulo cuatro se analizan los resultados y hallazgos más importantes encontrados en el diagnóstico, como las características de la población de estudio, brechas debido al género y el cuido, y oportunidades encontradas y posibles alianzas que pueden potenciar en trabajo en el Cantón de La Cruz. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que nacen de los hallazgos del diagnóstico.

1.1. Objetivo general

Identificar las capacidades productivas a partir de la trayectoria laboral y las brechas de acceso a oportunidades socioeconómicas de las mujeres migrantes en el cantón de La Cruz.

1.2. Objetivo específico

- Conocer las principales barreras que enfrentan las mujeres migrantes para acceder al empleo formal o desarrollar emprendimientos propios en el cantón.
- Identificar las oportunidades económicas del territorio y los sectores con mayor potencial para la inserción o el autoempleo de mujeres migrantes.
- Mapear la oferta formativa existente en La Cruz y la relación que tiene con las necesidades de las mujeres migrantes.

2. Marco teórico

2.1. Economía del cuidado en la migración

La Economía Feminista constituye una corriente de pensamiento que se propone visibilizar las dimensiones de género de la dinámica económica y sus implicaciones para la vida de las mujeres, pone énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía, y de la diferente posición de los varones y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas. Rodríguez Enriquez propone una perspectiva económica centrada en el papel fundamental del trabajo de producción y reproducción de las personas, denominado ampliamente como trabajo de cuidado (Rodríguez Enríquez, 2012, 2015).

Respecto al enfoque convencional de la economía, centrado en el intercambio y la elección de bienes y servicios en el mercado, esta corriente propone desplazar el objeto de estudio hacia la provisión, es decir, hacia los bienes y procesos necesarios para la supervivencia humana, (Nelson, 1993, 1996, citada en Rodríguez Enríquez, 2012).

En este sentido, Rodríguez Enríquez (2012) permite comprender cómo la feminización del cuidado se extiende al mercado laboral remunerado, dinámica que en contextos migratorios se traduce en la inserción de mujeres migrantes en sectores específicos de cuidado:

> Esta extensión de la esfera de análisis del cuidado permite advertir cómo la "feminización" del cuidado traspasa las fronteras de los hogares, y se naturaliza la sobrerrepresentación femenina en ciertas actividades de cuidado remuneradas (en el sector salud, en la educación, en el servicio doméstico). El cuidado aparece así como un problema de política pública, que se escapa por tanto del terreno estricto de lo privado y de su naturalización como un asunto de mujeres (p. 28)

Las cadenas globales de cuidado, los flujos de precios, materiales y valores agregados están incompletos si no se toman en cuenta los beneficios que genera la circulación de trabajo, los cambios ocurridos en las familias de quienes emigran, y señala que la reducción del costo de oportunidad de las personas cuyo trabajo de cuidados se sustituye por trabajo inmigrante, y la reorientación de los "ahorros" del cuidado entre los países de origen y destino de la migración Vásconez (2012).

Esquivel (2012) por su parte analiza también los cuidados desde la perspectiva de las mujeres migrantes y resalta que las trabajadoras domésticas y/o cuidadoras migrantes encuentran este estatus en los países de llegada, al insertarse en las ocupaciones de cuidado, en algunos casos con independencia de las ocupaciones que hayan tenido en sus países de origen o su nivel educativo. No obstante, este no es el único caso: flujos migratorios de similares características pueden encontrarse también en el caso de ecuatorianas y colombianas hacia España, peruanas hacia Chile y España, paraguayas hacia Argentina, y nicaragüenses hacia Costa Rica (Esquivel, 2012).

En ese sentido, Rodríguez Enriquez (2015) también se refiere al cuidado y a la organización del trabajo como una de las dimensiones a considerar en la Economía feminista, considera el peso real del trabajo de cuidado no remunerado en el funcionamiento del sistema económico se relaciona con la manera en que socialmente se organiza la reproducción de las personas y esto puede pensarse a partir del concepto de organización social del cuidado, el cual refiere a la manera en que, las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen cuidado.

Esta crítica conceptual se centra en visibilizar que el trabajo de cuidado sostiene materialmente el funcionamiento del sistema económico. Rodríguez Enríquez (2015) profundiza este punto al señalar que la carga de cuidado se distribuye de forma marcadamente desigual entre géneros, en el caso argentino, las mujeres destinan el doble de tiempo que los varones a actividades de cuidado y que dicho trabajo no

remunerado, pese a su magnitud, ha permanecido históricamente fuera de las cuentas nacionales. En ese sentido, las barreras de acceso al empleo formal y al emprendimiento no pueden explicarse exclusivamente por las condiciones de oferta y demanda del mercado laboral local, sino que deben leerse en relación con la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

2.2. Oportunidades para mujeres migrantes

El enfoque de las capacidades de Nussbaum permite comprender los mecanismos a través de los cuales pueden generarse oportunidades reales, la autora distingue entre capacidades básicas, internas y combinadas: las básicas corresponden al equipamiento innato de la persona; las internas son los estados desarrollados de la persona que la hacen apta, por sí misma, para ejercer una función; y las combinadas son las capacidades internas sumadas a las condiciones materiales y sociales externas que efectivamente permiten ejercerlas (Nussbaum, 2000). Esta diferenciación es importante para pensar las oportunidades de forma integral, una persona puede tener desarrollada la capacidad interna para trabajar contar con destrezas que podría emplear y aun así carecer de la capacidad combinada porque su entorno se lo impide. Nussbaum ilustra este punto con mujeres que, impulsadas por la necesidad material, desean trabajar fuera del hogar y poseen destrezas que podrían usar para ello, pero son impedidas por presiones familiares o religiosas (Nussbaum, 2000), evidenciando que generar oportunidades no depende únicamente de la agencia individual, sino de que el entorno se transforme para hacerla efectiva.

Nussbaum incluye el trabajo dentro de su lista de capacidades humanas centrales, en la capacidad de Afiliación, señala que toda persona debe poder trabajar como ser humano, ejerciendo la razón práctica y estableciendo relaciones de reconocimiento mutuo con otras personas trabajadoras, y el derecho a poseer propiedad y a buscar empleo en igualdad de condiciones con los demás, no únicamente de manera formal, sino en términos de oportunidad real (Nussbaum, 2000).

Esta perspectiva permite comprender el caso de las mujeres migrantes, evidencia que la ampliación de sus oportunidades económicas no puede limitarse al fortalecimiento de sus capacidades individuales, sino que requiere intervenir también sobre las condiciones del entorno que determinan la posibilidad real de su desarrollo. En este sentido, el presente diagnóstico permite aproximarse a la realidad estructural que enfrentan las mujeres migrantes, con el propósito de identificar, desde su vínculo con el territorio, cuáles son sus necesidades reales y a través de qué mecanismos es posible fortalecer sus capacidades a partir de las condiciones concretas de su entorno.

3. Marco metodológico

3.1. Enfoque de investigación

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, con este enfoque también se estudian fenómenos de manera sistemática, sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego "voltear" al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí, mientras se revisan estudios previos, para generar resultados consistentes (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018).

El estudio tiene un diseño no experimental transversal descriptivo, busca indagar el nivel o estado de una o más variables en una población (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018) y tiene alcance descriptivo, permitiendo un acercamiento sistemático al fenómeno antes de establecer relaciones causales entre variables. La información se recolecta en un único momento, con el propósito de captar la situación actual de la población objetivo para comprender las trayectorias laborales y las barreras de acceso al empleo de las mujeres migrantes en el cantón de La Cruz, así como caracterizar, desde su propia experiencia, las oportunidades económicas del territorio y la oferta formativa disponible.

3.2. Recolección de los datos

La estrategia de muestreo utilizada fue de tipo no probabilístico, ya que la selección de participantes no respondió a un proceso de aleatorización, sino a la identificación de personas con características relevantes para los objetivos de la investigación. Para los grupos focales, el criterio de selección fue ser mujer migrante, refugiada o solicitante de refugio. Para las entrevistas semiestructuradas, la selección se orientó a informantes con un rol específico de conocimiento sobre el tema.

La recolección de información se realizó mediante 2 entrevistas y 3 grupos focales. Se desarrollaron dos grupos focales presenciales en las instalaciones de la Municipalidad de La Cruz, esto pudo generar un sesgo al haberse realizado dentro de las instalaciones de una institución de la localidad. El primer grupo tuvo la participación de ocho mujeres migrantes, el segundo grupo focal tuvo la participación de seis mujeres migrantes y el tercer grupo focal se desarrolló de forma virtual con la participación de 4 mujeres. En conjunto, las 3 sesiones reunieron a un total de 18 participantes, con edades comprendidas entre los 24 y los 65 años, todas de nacionalidad nicaragüense, las diferencias etarias permitieron tener una diversidad de perspectivas, desde mujeres jóvenes hasta mujeres adultas mayores que tienen desafíos y oportunidades distintas para en la inserción socioeconómica.

Así mismo, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas una con representación de la municipalidad de La Cruz y una entrevista con una persona experta en atención a procesos migratorios. La combinación de perspectivas directas de las mujeres migrantes en el centro y la mira institucional y de personas expertas permitió tener un análisis desde los dos niveles, tanto de quiénes migran y quiénes acompañamiento para integrarse a nivel local como de personas costarricenses que están involucradas en los procesos de inserción y acompañamiento a personas migrantes.

3.3. Análisis de la información

El análisis de la información se desarrolló bajo la lógica de un diagnóstico, enfocado en generar una primera caracterización sobre la situación socioeconómica de las mujeres migrantes en el cantón de La Cruz. Los grupos focales y las entrevistas realizadas fueron transcritos y sistematizadas mediante el software de reconocimiento de voz Whisper, lo que permitió contar con un registro textual fiel de las intervenciones de las participantes para su posterior procesamiento. A partir de las transcripciones, se elaboró un resumen de los hallazgos más relevantes en una matriz de Excel, organizado de acuerdo con las categorías de análisis definidas en función de los objetivos específicos de la investigación.

Para analizar la información obtenida se combinaron fuentes primarias (grupos focales y entrevistas) y secundarias con la evidencia documental de fuentes secundarias revisadas en el marco teórico y contextual del estudio. Se aplicó un proceso de triangulación de la información que consiste en combinar distintas fuentes de datos para el estudio de un mismo fenómeno, con el propósito de contrastar un conjunto de observaciones frente a otro y así alcanzar mayor precisión en su interpretación (Forni Grande, 2020), contrastando los hallazgos de ambos tipos de fuentes con el propósito de aumentar la validez de los resultados y de identificar coincidencias y matices sobre la situación socioeconómica del cantón de La Cruz.

3.4. Limitaciones de la investigación

El presente estudio presenta algunas limitaciones que conviene señalar para la correcta interpretación de sus resultados. En primer lugar, la totalidad de las mujeres migrantes que participaron en los grupos focales son de nacionalidad nicaragüense, lo cual responde a las características propias del cantón de La Cruz: se trata de un territorio con una población relativamente reducida, ubicado en la zona fronteriza con Nicaragua, donde este es el principal flujo migratorio presente. Si bien esta característica refleja la composición real de la población migrante del cantón, también implica que los hallazgos del estudio no recogen la perspectiva de mujeres migrantes de otras nacionalidades, lo que limita la posibilidad de identificar

particularidades asociadas a otros orígenes migratorios o de establecer comparaciones entre distintos colectivos.

Por otro lado, el estudio se desarrolló bajo un enfoque exclusivamente cualitativo, lo que permitió una comprensión profunda de las trayectorias laborales y las barreras percibidas por las participantes, pero no posibilita cuantificar la magnitud del fenómeno ni generalizar estadísticamente los hallazgos al conjunto de la población de mujeres migrantes del cantón. La incorporación de un componente cuantitativo, por ejemplo, una encuesta de caracterización socioeconómica habría permitido complementar y dimensionar los hallazgos cualitativos.

4. Resultados del diagnóstico

4.1 Perfil socioeconómico y trayectoria laboral de las mujeres migrantes

El cantón de La Cruz se encuentra entre los territorios con mayores rezagos socioeconómicos del país. Las provincias costeras de Guanacaste, Puntarenas y Limón presentan el mayor porcentaje de distritos con las condiciones más desfavorables del desarrollo social distrital, situación que se replica en el análisis cantonal y regional (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN], 2024). Esta condición se confirma también desde el enfoque del desarrollo humano, pues La Cruz figura entre los diez cantones con menor desarrollo humano del país, junto con otros territorios fronterizos como Los Chiles, Guatuso y Talamanca (Instituto Mixto de Ayuda Social [IMAS], 2024). Es en este contexto de rezago estructural y fronterizo que debe comprenderse la trayectoria laboral de las mujeres migrantes nicaragüenses analizada a continuación.

Por tanto, es importante detenerse en el estado de la trayectoria laboral de las mujeres migrantes, pues esta no comienza en Costa Rica. Varias de las participantes de los grupos focales relataron haber trabajado antes de migrar en actividades textiles, agrícolas o industriales, este dato resulta significativo porque muestra que, para una parte de estas mujeres, insertarse laboralmente en Costa Rica no representa una primera experiencia en el mercado de trabajo, sino que se podría leer como un patrón de continuidad en la inserción precarizada y de baja calificación, únicamente trasladado de un lado a otro de la frontera.

Una vez asentadas en el cantón, la actividad económica de las mujeres migrantes se despliega con pocas opciones como el trabajo agrícola en cosechas de naranja y café, recolección de frijoles, trabajo doméstico remunerado, crianza de animales de traspatio (gallinas, pollos) que en ocasiones funcionan para el autoconsumo y venta,

así mismo, la siembra de granos básicos (maíz, frijol, yuca) para consumo y venta familiar, y la elaboración y venta ambulante de alimentos (pan, rosquillas, tamales, nacatamales, tajadas, pinol). A esto se suma, para quienes cuentan con permiso laboral debido asu condición de refugio, el empleo asalariado en el sector hotelero, identificado de manera reiterada por ambas funcionarias entrevistadas como la principal fuente de trabajo formal del cantón (ENT01, 2026; ENT02, 2026). El trabajo doméstico remunerado que replica un patrón para las mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica, cuyo rol en la provisión de cuidados dentro de los hogares costarricenses ha sido caracterizado como una verdadera cadena global de cuidados sostenida en la desigualdad de género y de origen nacional (Carcedo et al., 2011).

“En la temporada de naranja que se da en Santa Cecilia sí he salido a trabajar a las cosechas de naranja, y un tiempo estuve en la recolección de café también”.

(GF01, 2026)

Este perfil ocupacional confirma, en el terreno empírico, lo que la economía feminista latinoamericana ha señalado sobre la inserción desigual de hombres y mujeres en la estructura productiva (Esquivel, 2012). Las mujeres migrantes no compiten en el mismo terreno de oportunidades que el resto de la fuerza de trabajo, estas ocupan un segmento específico y acotado del mercado el de los cuidados, el servicio doméstico y la economía de subsistencia que la contabilidad económica convencional tiende a invisibilizar por no transitar plenamente por el mercado formal (Rodríguez Enríquez, 2012). Esta segmentación se corresponde con un patrón regional más amplioen América Latina, el trabajo doméstico remunerado continúa siendo una de las principales vías de inserción laboral para mujeres migrantes, en un cruce de desigualdades de género, clase, raza y territorio que perpetúa condiciones de informalidad, desprotección y bajos salarios (Valenzuela y Scuro, 2020). En el caso costarricense específicamente, este vínculo entre feminización de la migración y trabajo de cuidados ha sido leído como una forma de "descuido" institucional hacia quienes sostienen, mediante su trabajo remunerado y no remunerado, la reproducción social de otros hogares (Gatica López, 2026)

Un hallazgo relevante de los grupos focales es el peso que tiene el trabajo de subsistencia por cuenta propia, pues este no siempre es reconocido como “trabajo” por quienes lo realizan. Al preguntarse directamente si habían tenido algún tipo empleo, varias mujeres respondieron de forma negativa y solo nombran actividad económica de sembrar, coser, criar animales cuando la pregunta se formuló para incluir el trabajo por cuenta propia o no reconocido formalmente (GF01, 2026; GF02, 2026). Esta subvaloración histórica del trabajo femenino es consistente con lo que Rodríguez Enriquez (2012) documenta sobre la infravaloración histórica del trabajo femenino que no pasa por una relación salarial formal y queda en evidencia que las

mujeres lo han interiorizado, al considerar desde el discurso cotidiano esta brecha entre “trabajo” y “ayuda económica”.

Respecto a la evolución del perfil migrante en los últimos ocho años, las dos funcionarias entrevistadas coinciden en señalar como principal cambio institucional la instalación intermitente de una oficina de atención a la población migrante impulsada originalmente por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y posteriormente asumida, con discontinuidad presupuestaria, por la municipalidad (ENT01, 2026; ENT02, 2026). Antes de su creación, la llegada de personas migrantes se procesaba de manera informal, sin ningún mecanismo de orientación o registro.

Sin embargo, ninguna de las dos percibe un cambio drástico en el perfil general de la población atendida, aunque una de ellas identifica una tendencia hacia una mayor cualificación educativa en una parte de las mujeres migrantes, quienes han logrado acceder a estudios superiores gracias al apoyo de redes de cooperación. Esta cualificación, no obstante, rara vez se traduce en permanencia en el cantón por la escasez de oportunidades laborales calificadas que empuja a las con mayor formación hacia centros urbanos como San José región de La Bajura, de modo que el perfil que finalmente se asienta en La Cruz tiende a ser el de menor calificación relativa, lo cual es consistente con el patrón de brecha centro-periferia documentado para el cantón (Municipalidad de La Cruz, 2017; MIDEPLAN, 2024).

A esta selectividad se suma la circularidad fronteriza cotidiana descrito por una de las funcionarias esta afirma que gran parte de las personas que llegan al cantón no se asientan, sino que ingresan en la mañana a comercializar productos y regresan a Nicaragua en la tarde en la tarde una vez vendida su mercancía generalmente sin ningún tipo de permiso migratorio (ENT02, 2026). Por su parte, quienes permanecen de forma más estable son, en su mayoría, mujeres con arraigo familiar previo parejas, hijos nacidos en el país o que llegaron durante la niñez junto con sus madres, como fue el caso de varias participantes de los grupos focales que llevan entre 16 y más de 50 años residiendo en Costa Rica.

En síntesis, el perfil socioeconómico de las mujeres migrantes en La Cruz se caracteriza por una inserción laboral segmentada, de baja formalización y alta rotación entre actividades, en la que la agricultura estacional, el servicio doméstico, la costura y la venta informal de alimentos operan como estrategias de generación de ingresos complementarias más que como trayectorias de desarrollo profesional sostenido (Fernández-Fernández et al., 2024). Como se desarrolla en el siguiente apartado, esta configuración no puede explicarse únicamente por las condiciones de oferta y demanda del mercado laboral local, sino que está mediada por barreras estructurales de tipo migratorio, territorial y de género (Mena Gómez et al., 2025).

4.2 Barreras de acceso al empleo formal y al emprendimiento

Tanto las entrevistas institucionales como los grupos focales convergen en identificar la irregularidad migratoria como la barrera más determinante para el acceso al empleo formal. Sin un estatus migratorio regularizado, la contratación por parte de empresas resulta inviable, quedando el trabajo doméstico en hogares particulares como una de las pocas vías de inserción disponibles. Estas condiciones limitan el tipo de empleo al que pueden aspirar las mujeres migrantes, también las expone a relaciones laborales sin garantías. En ese sentido, varias participantes describieron trabajos pagados "por el día", sin aseguramiento en la Caja Costarricense de Seguro Social, ni cumplimiento de otras obligaciones laborales, particularmente en la agricultura y el trabajo doméstico.

El costo económico y administrativo de la regularización migratoria constituye, en sí mismo, una barrera de primer orden. Las participantes describieron con detalle el peso que representa la renovación periódica de la cédula de residencia con costos, que oscilan entre 125 dólares y montos que, en el caso de trámites de naturalización o apostillado de documentos en Nicaragua, pueden superar 1425 dólares, sumado a los gastos de transporte hasta Liberia, donde se concentran los trámites. Una participante relató haber invertido todos sus ahorros de una actividad de venta de ropa en un proceso de naturalización que sigue sin resolución, quedando sin capital de trabajo y sin certeza sobre el resultado del trámite (GF01,2026). Se debe tomar en cuenta que esta situación no es excepcional: la población migrante en la región presenta de forma sistemática un menor bienestar financiero que la población no migrante, brecha que se explica en buena medida por las barreras administrativas y de documentación que condicionan su acceso a productos financieros básicos (CAF, 2024).

“Uno emprende con lo poquito que tiene. No tenemos eso una seguridad financiera o préstamo accesible. Acá todas las mujeres inmigrantes no tenemos eso”

(GF01, 2026)

Un segundo bloque de barreras, entrelazado al anterior, es el conjunto de requisitos administrativos y sanitarios exigidos para formalizar un emprendimiento como lo son, patentes municipales, permiso del Ministerio de Salud, infraestructura con especificaciones que muchas participantes no pueden costear (mesas de acero inoxidable, paredes lisas de cemento), y el carné de manipulación de alimentos. Como señaló una de las funcionarias entrevistadas, cuando el Ministerio de Salud y la municipalidad cobran cada parte del trámite, la actividad deja de ser rentable para muchas vendedoras formales, que optan por vender “a escondidas” o “camufladas”, asumiendo el riesgo de decomiso de su mercadería (ENT01,2026).

A estas exigencias regulatorias se suma una barrera educativa creciente, varias participantes señalaron que los requisitos mínimos de escolaridad para acceder tanto a empleos de baja calificación como programas de capacitación del Instituto Nacional de aprendizaje (INA) han aumentado progresivamente, pasando de exigir tercer año de colegio a exigir bachillerato completo, e incluso sexto grado de primaria para labores de limpieza. Para mujeres que migraron en la niñez o adolescencia sin completar la educación formal, este requisito representa un obstáculo difícil de superar en la adultez, agravado por el costo de los exámenes de educación abierta alrededor de 8 mil colones por materia y del trámite del título.

“Le dicen a uno de que, si no tiene un documento legal acá en el país, no le dan trabajo. Y ya teniendo uno el documento legal, lo que le piden es escolaridad.”

(GF02, 2026)

El acceso al crédito y al financiamiento constituye una barrera crítica para el emprendimiento. Las participantes describieron un doble obstáculo, las entidades financieras exigen garantías (propiedad, vehículo, ingresos demostrables) con las que rara vez cuentan las mujeres migrantes de bajos recursos; por otro, la práctica de fiar la mercadería a la clientela local, una estrategia de fidelización casi obligada en economías locales de escasa liquidez inmoviliza el capital de trabajo de las vendedoras. Este patrón coincide con lo documentado para mujeres emprendedoras en Centroamérica, cuyo acceso al financiamiento formal se ve limitado precisamente por la combinación de ingresos inestables, ausencia de historial crediticio o garantías, y la sobrecarga de trabajo de cuidado no remunerado, factores que en conjunto restringen su autonomía económica (ONU Mujeres, 2026). Esto hace que muchos pequeños negocios resulten, en la práctica, insostenibles, pese a haber accedido a ellos, por la combinación de deudas incobrables, costos de materiales y competencia de productos importados de bajo costo.

Estas barreras no pueden atribuirse únicamente a las condiciones de oferta y demanda del mercado laboral local, tal como advierte el marco teórico de la economía feminista la exclusión de las mujeres migrantes del empleo formal y del emprendimiento sostenible resulta de la intersección entre un régimen migratorio restrictivo y costoso, una estructura productiva territorial limitada, y una arquitectura institucional (tributaria, sanitaria, financiera) que no fue diseñada considerando las condiciones reales de la población migrante de bajos recursos (Rodríguez Enríquez, 2012). Como se desarrolla en el siguiente apartado, esta intersección se agrava de forma particular cuando se añade la variable del cuidado.

4.3 Responsabilidades de cuido y su relación con la inserción económica

A nivel nacional, la sobrecarga de cuidados, también observada en las mujeres migrantes en La Cruz, es una desigualdad estructural más amplia, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2022 muestra que las mujeres costarricenses dedican en promedio 32 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente a apenas 16 horas de los hombres, una brecha que se ha mantenido prácticamente invariable en los últimos años (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2022). Esta desigualdad ha sido reconocida formalmente por el Estado costarricense a través de la Política Nacional de Cuidados 2021-2031, que busca articular una respuesta institucional al problema, aunque su implementación efectiva en territorios rurales y fronterizos como La Cruz sigue siendo limitada (Instituto Mixto de Ayuda Social y Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 2021).

Este diagnóstico confirma, con evidencia empírica directa, uno de los planteamientos centrales del marco teórico, que la carga de los cuidados no remunerado condiciona de forma determinante la disponibilidad de tiempo de las mujeres migrantes para el trabajo remunerado, y esta condición rara vez es reconocida como una restricción estructural en el diseño de la política pública local (Rodríguez Enríquez, 2015). Para las mujeres migrantes nicaragüenses en particular, esta sobrecarga se agrava por su condición migratoria, ya que la ausencia de una red de apoyo institucional las obliga a resolver el cuidado exclusivamente dentro del ámbito familiar, en lo que ha sido descrito como una "solución inmediata" y precaria frente a una crisis de cuidados no resuelta por el Estado (Fernández-Fernández, 2021).

También puede comprenderse desde el enfoque de las capacidades de Nussbaum (2000), quien señala el derecho de toda persona a buscar empleo en igualdad de condiciones con los demás. En el caso de las mujeres migrantes de La Cruz, la ausencia de una oferta de cuido accesible constituye precisamente el tipo de condición externa que, según Nussbaum, puede impedir que una persona ejerza una capacidad que posee (Nussbaum,2000).

En ese sentido, la ausencia de infraestructura de cuido accesible en las comunidades rurales del cantón particularmente en Santa Elena y Santa Cecilia fue señalada de manera reiterada como el principal obstáculo para que las mujeres con hijos e hijas pequeños puedan optar por un empleo fuera del hogar. Las participantes explicaron que, aunque existen Centros de Educación y Nutrición (CEN-CINAI) en localidades cercanas, la distancia y el costo del transporte diario para llevar a los niños y niñas hasta esos centros absorbería la totalidad de su salario. Ambas funcionarias

entrevistadas confirman este vacío institucional, no existe oferta de cuido infantil en Santa Elena, y el acceso a los cupos disponibles en La Cruz está condicionado a una valoración socioeconómica del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) que, a su vez, exige que las solicitantes cuenten con documentación migratoria al día.

“Por lo mismo, por lo que no hay trabajo, si económicamente uno no está muy bien y los pagos son pocos, se iría todo en pasajes para llevar a los niños desde el pueblo de nosotros hasta el CEN, y de regreso no es algo viable.”

(GF01, 2026)

Este hallazgo puede leerse en clave de lo que Rodríguez Enríquez (2012) denomina, recuperando a Amartya Sen, los "conflictos cooperativos" al interior del hogar, la disponibilidad de tiempo de las mujeres para el trabajo remunerado no depende únicamente de su voluntad o capacidad individual, sino de una división sexual del trabajo doméstico que las coloca, de manera generalizada, como responsables casi exclusivas del cuidado de hijos, hijas, nietos y, en varios casos relatados en los grupos focales, de personas adultas mayores o con necesidades de salud específicas. Ninguna de las participantes de los tres grupos focales mencionó una distribución compartida de estas tareas con sus parejas; por el contrario, varias explicaron que su propia madre, ya adulta mayor, tampoco podía asumir el cuido de sus hijos, lo que estrecha aún más el margen de maniobra.

La estrategia predominante que emerge de los testimonios no es la búsqueda de empleo fuera del hogar, sino la generación de ingresos compatible con la permanencia física en el hogar o en su entorno inmediato, la venta ambulante de alimentos elaborados en casa, la costura por encargo, la crianza de animales de traspatio y la agricultura de subsistencia comparten, precisamente, la característica de permitir que el cuido de los hijos e hijas y la generación de ingresos ocurran de manera simultánea, aunque a costa de una intensificación del trabajo total de las mujeres. Una participante propuso de manera explícita organizar turnos rotativos entre varias mujeres para compartir un local de venta en La Cruz, argumentando que esta modalidad permitiría generar ingresos sin tener que dejar de "ver a los hijos" ni pagar a un tercero para cuidarlos, y sin comprometerse a un alquiler diario que no siempre sería rentable (GF01, 2026)

El testimonio de una de las funcionarias entrevistadas añade una dimensión institucional a este hallazgo ya que, en su experiencia, la ausencia de una oferta articulada de cuido infantil y no la falta de voluntad de las mujeres explica en buena medida por qué muchas de ellas no participan en capacitaciones o procesos de acompañamiento para el emprendimiento, aun cuando son convocadas de manera activa (ENT02 2026). La funcionaria concluye, de forma explícita, que sin resolver el cuido de los hijos e hijas no será posible "sacar a esas mujeres a trabajar", lo que

constituye un reconocimiento institucional, aunque aislado de la centralidad del cuido en cualquier estrategia de inserción económica.

4.4 Capacidades, saberes y potencial productivo no aprovechado

A nivel regional, la concentración de las mujeres migrantes en actividades de autoempleo informal es una manifestación local de un patrón estructural. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las mujeres representan una alta proporción del empleo informal urbano en el mundo, una tendencia que se agudiza entre migrantes y otros grupos con menor acceso a oportunidades laborales formales (OIT, 2022) a lo que se suma una brecha digital de género que persiste en el uso más avanzado de las tecnologías con fines productivos o de emprendimiento, particularmente entre mujeres de zonas rurales con menor escolaridad (MICITT y CICOM-UCR, 2017).

La evidencia recopilada en las entrevistas y grupos focales indica que las participantes poseen una diversidad de conocimientos, habilidades y experiencias productivas que, en gran medida, permanecen subutilizadas. Los hallazgos muestran la existencia de un potencial económico limitado por barreras estructurales de acceso al empleo formal, restricciones para el desarrollo de emprendimientos y una escasa articulación entre dichos saberes y las oportunidades disponibles en el territorio.

Uno de los principales ámbitos en los que se concentran estas capacidades es la elaboración de alimentos. La mayoría de las mujeres que participó en los grupos focales manifestó tener experiencia en la preparación y comercialización de distintos productos, entre ellos tortillas, pan, repostería, carne asada y comidas preparadas, actividades que varias de ellas han desarrollado de manera intermitente como estrategia de generación de ingresos para el hogar. En algunos casos, estas experiencias se complementan con formación específica, como la certificación en manipulación de alimentos otorgada por el Ministerio de Salud o experiencia laboral previa en restaurantes, lo que representa una base importante para el sector gastronómico o turístico.

Un aspecto particularmente relevante es que parte de estos conocimientos está asociado a la preparación de alimentos tradicionales nicaragüenses, como nacatamales o buñuelos, cuya elaboración es poco común entre la población costarricense. Este tipo de emprendimientos se inscribe como “economía étnica” o “mercado de la nostalgia” negocios que surgen de la demanda de productos culturales propios del país de origen y que constituyen, para la población migrante, una vía de autoempleo basada en el capital cultural que trae consigo (Solé y Parella, 2005). Además de constituir una alternativa de autoempleo, estos productos

representan una oportunidad para atender nichos de mercado poco desarrollados y diversificar la oferta gastronómica del cantón mediante la incorporación de conocimientos culinarios propios de la población migrante.

Las mujeres también cuentan con experiencias vinculadas a otras actividades productivas, entre ellas la costura, el bordado y la confección de prendas, así como conocimientos sobre el uso de maquinaria utilizada para la elaboración de alimentos y procesos de manufactura artesanal. Estas competencias técnicas reflejan trayectorias laborales previas que podrían ser aprovechadas en iniciativas productivas de mayor escala o en procesos de capacitación especializada.

Otro activo importante identificado corresponde a las redes sociales y comerciales construidas por las propias mujeres. Varias participantes señalaron que el éxito de sus pequeños emprendimientos ha dependido, en gran medida, de las relaciones de confianza establecidas con habitantes del cantón, quienes constituyen su principal clientela, e incluso cuentan en algunos casos con proveedores en Nicaragua que les facilitan el abastecimiento de mercancías a bajo costo (GF02, 2026). Esta centralidad de las redes sociales coincide con hallazgos de estudios recientes sobre emprendimiento migrante, que identifican el capital social como uno de los factores más asociados a la permanencia y crecimiento de los pequeños negocios de personas migrantes, por encima incluso del acceso a financiamiento formal (Calle García, 2026). Por ejemplo, una participante comentó: “yo, pues, yo emigro como siempre a Nicaragua, a, a emprender, para venir a emprender acá, trabajo como vendiendo ropa, lo que todas las compañeras de acá del pueblo y de otras me encargan, pues, yo salgo a hacer.” (GF01, 2026).

Aunque el nivel educativo de la mayoría de las participantes es limitado, ello no implica una ausencia de competencias digitales básicas. Las mujeres manifestaron utilizar de forma cotidiana teléfonos inteligentes, aplicaciones de mensajería y videollamadas, redes sociales e internet para comunicarse con familiares, promover ventas o mantener contacto con clientes. Si bien estas habilidades aún son elementales, constituyen una base sobre la cual podrían desarrollarse procesos de formación orientados al comercio digital y al fortalecimiento de emprendimientos.

De manera transversal, los grupos focales también evidenciaron una alta disposición para aprender y fortalecer sus capacidades productivas. Las participantes expresaron interés en acceder a procesos de formación que les permitan mejorar sus condiciones de inserción laboral o consolidar actividades económicas propias, lo que sugiere que la principal limitación no reside en la falta de motivación, sino en las restricciones de acceso a oportunidades de capacitación pertinentes y sostenidas.

No obstante, un hallazgo significativo es que una parte importante de estas capacidades permanece invisibilizada incluso para las propias mujeres. Como se

mencionó en la descripción del perfil económico, durante los grupos focales, la mayoría afirmó inicialmente no tener trabajo; indicando que eran sus esposos quienes sostenían económicamente el hogar. Sin embargo, conforme avanzó la conversación, se identificó que casi todas desarrollaban alguna actividad económica, ya fuera mediante la elaboración y venta de alimentos, actividades agrícolas familiares, comercio informal, prestación ocasional de servicios, o en algunos casos, incluso se identificó que contribuían de forma similar al mismo emprendimiento o unidad productiva de sus esposos. Esto coincide con lo documentado en la literatura sobre mercados laborales rurales, las labores familiares no remuneradas y los pequeños emprendimientos feminizados, al no ser declarados ni detectados por la métrica oficial del empleo, terminan engrosando artificialmente las cifras de inactividad femenina (Rodríguez Garcés, 2019)

Esta diferencia en la forma de reconocer el trabajo refleja la persistencia de una división sexual del trabajo que trasciende la distribución de las tareas domésticas y condiciona la valoración social de las actividades económicas realizadas por las mujeres. En términos de la economía feminista, esta invisibilización constituye una manifestación adicional de la desvalorización histórica del trabajo femenino descrita por autoras como Rodríguez Enriquez (2012) o Rodríguez Garcés (2019), en la medida en que numerosas actividades generadoras de ingresos continúan siendo percibidas como una extensión de las responsabilidades domésticas y no como trabajo productivo.

Asimismo, también pueden entenderse desde el enfoque de las capacidades de Nussbaum (2000), que distingue entre capacidades internas los estados desarrollados de la persona que la hacen apta. Las mujeres migrantes de La Cruz cuentan con capacidades, saben elaborar alimentos, coser, gestionar redes comerciales y utilizar herramientas digitales básicas. Sin embargo, la persistencia de barreras estructurales, administrativas y de reconocimiento social impide que estas capacidades se traduzcan en capacidades combinadas, es decir, en oportunidades económicas efectivamente ejercibles. Esto confirma el planteamiento de Nussbaum de que la ampliación de oportunidades no depende únicamente de la agencia individual, sino de que el entorno se transforme para hacerla posible.

En este sentido, es importante también señalar que algunas de las participantes son en mayor o menor medida conscientes de estas desigualdades. Este es especialmente el caso para quienes han participado en talleres sobre temáticas de género facilitados por el Instituto de las Mujeres (INAMU), como una participante que mencionó que “Yo soy una de esas que me gusta mi propio dinero, me compro lo que yo quiero, ¿verdad? Eh, no me gusta estar allí encima del marido, ¿verdad? Pero, este, sí, me gustaría salir adelante.” (GF01, 2026).

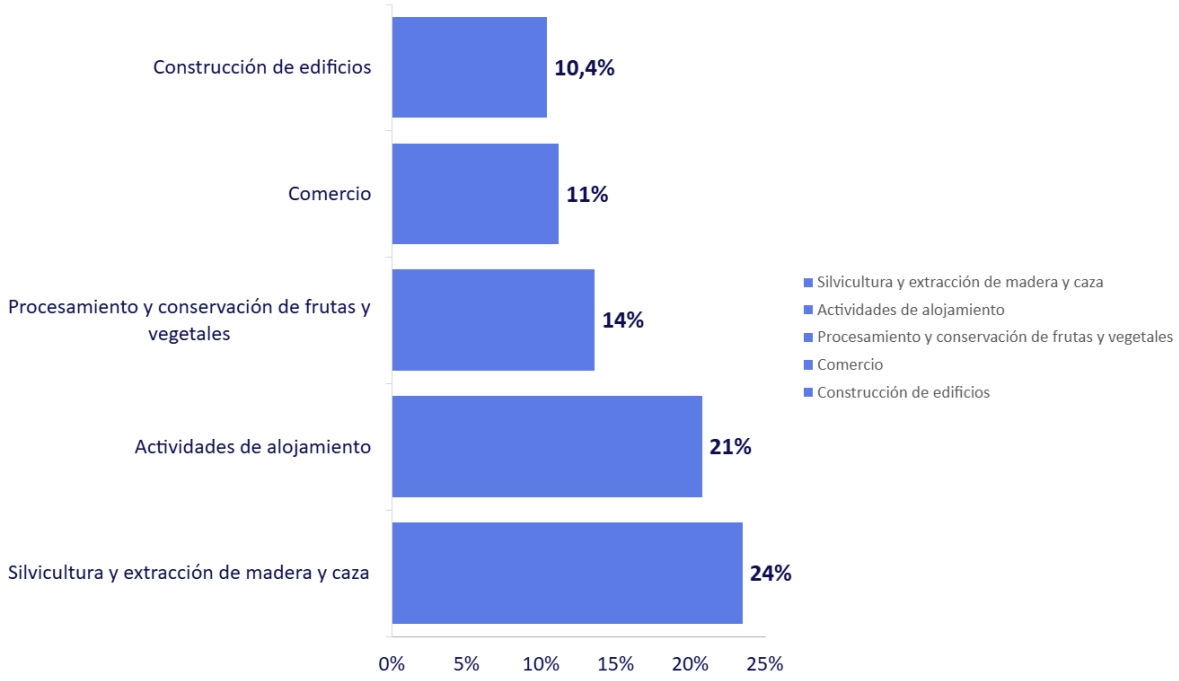
4.5 Oportunidades económicas y sectores con potencial en el territorio

La Cruz es uno de los cantones de Costa Rica con más bajos niveles de desarrollo económico y humano, ubicándose en el puesto 80 de 82 del Índice de Competitividad Cantonal (ICN) 2025 (CPC, sf.). De acuerdo con los datos del ICN, solo el 33.1% de la población entre 25 a 34 años en el cantón cuenta con la secundaria completa. Además, el PIB per cápita del cantón es el tercero más bajo del país, el desempleo es del 13%, y solo hay 5.6 mujeres con empleo por cada 10 hombres.

De acuerdo con datos del XI Censo Nacional de Población del INEC (2023), el sector que concentra el mayor volumen de población ocupada en el cantón en la actualidad es el comercio, desplazando a un segundo puesto al sector de agricultura y pesca, que anteriormente fue el principal sector económico. Este cambio se relaciona con el proceso de expansión de las actividades turísticas y de servicios experimentado por el cantón durante las últimas décadas.

Un punto de inflexión importante fue la apertura del complejo turístico Dreams Las Mareas en 2015, proyecto que implicó una inversión de aproximadamente US$125 millones y que, de acuerdo con la Presidencia de la República (2015), generaría 600 empleos directos, la mitad de ellos para personas de la región Chorotega. La importancia de esta inversión para el mercado laboral local también se refleja en acciones posteriores de la Municipalidad de La Cruz, que reportó la realización de ferias de empleo orientadas, entre otras necesidades, a facilitar la contratación de mano de obra para el hotel (Municipalidad de La Cruz, 2021). Asimismo, este cambio es consistente con lo mostrado por los datos del Banco Central de Costa Rica, los cuales permiten observar que las actividades de alojamiento representan actualmente alrededor del 21 % del PIB cantonal, mientras que el comercio aporta un 11 %, evidenciando el peso que han adquirido las actividades vinculadas al turismo y los servicios dentro de la estructura productiva local (Gráfico 1).

Gráfico 1. Contribución al PIB cantonal de principales actividades económicas



Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR (2026)

Los actores clave entrevistados coincidieron en que el turismo constituye la principal actividad económica identificada con potencial para la generación de empleo formal. Tanto la Oficina de Apoyo a la Persona Migrante como la Vicealcaldía señalaron que el desarrollo hotelero en el cantón y en las zonas costeras cercanas representa una de las principales fuentes de empleo asalariado de la región. En particular, se destacó la presencia del complejo turístico referenciado previamente, que consideran es "Uno de los hoteles más grandes de aquí de la zona. Esa es la principal fuente de trabajo acá, que lo habían cerrado por un año, pero están ahorita en agosto y lo van a volver otra vez a aperturar" (ENT01, 2026).

Sin embargo, la existencia de estas oportunidades no garantiza, por sí misma, el acceso de esta población a empleos de calidad ni la consolidación de iniciativas productivas propias. Por el contrario, la evidencia sugiere que las posibilidades de aprovechamiento de estos sectores se encuentran condicionadas por las barreras analizadas en apartados anteriores, entre ellas la irregularidad migratoria, las responsabilidades de cuidado, las limitaciones de movilidad y las dificultades para acceder a procesos de capacitación.

Una posibilidad mencionada en este ámbito fue la de fortalecer la articulación con organizaciones locales como la Asociación Cámara de Turismo de La Cruz (ASCATUR), lo que podría ampliar las oportunidades de contratación para mujeres migrantes en

ocupaciones relacionadas con hotelería, limpieza, atención al cliente, cocina y servicios generales (ENT01, 2026).

No obstante, las propias participantes de los grupos focales señalaron que el acceso a estos puestos de trabajo continúa siendo limitado. Además de los requisitos administrativos y educativos exigidos por muchas empresas, las responsabilidades de cuidado dificultan la adaptación a jornadas rotativas o extensas, características frecuentes en el sector turístico (GF02, 2026). En consecuencia, aunque este constituye el principal mercado laboral formal del territorio, su capacidad para absorber mano de obra femenina migrante depende de que se puedan establecer acuerdos o estrategias que permitan mitigar las barreras de acceso previamente identificadas.

Por su parte, la agricultura continúa siendo otra de las principales fuentes de trabajo para la población migrante del cantón. Las participantes mencionaron la recolección de naranja, café y piña como actividades de contratación temporal, así como otras labores agrícolas desarrolladas junto a sus familias (GF01, 2026). Si bien estos trabajos representan una fuente importante de ingresos para numerosos hogares, se caracterizan por una marcada estacionalidad y por condiciones laborales que ofrecen escasas posibilidades de estabilidad económica, lo que limita su capacidad para constituirse en una estrategia sostenible de inserción laboral.

De manera complementaria, las entrevistas y grupos focales identificaron diversas oportunidades para el fortalecimiento de emprendimientos de pequeña escala, particularmente en actividades relacionadas con la elaboración de alimentos. La venta de comida típica nicaragüense fue señalada de forma consistente como una actividad con demanda creciente dentro del cantón, especialmente productos como nacatamales, tajadas, rosquillas y otros alimentos tradicionales. Este hallazgo resulta consistente con las capacidades productivas identificadas en las participantes y evidencia la existencia de nichos de mercado que podrían fortalecerse mediante procesos de formalización, capacitación y acceso a financiamiento.

En esta misma línea, la elaboración artesanal de pan y repostería aparece como otra alternativa con potencial de crecimiento. Varias mujeres ya desarrollan estas actividades de forma informal y algunas instituciones locales reconocen que existe demanda tanto en el distrito central de La Cruz como en comunidades cercanas como Santa Cecilia. La posibilidad de agregar valor a estos productos mediante procesos de comercialización más estables representa una oportunidad para incrementar los ingresos de los hogares sin requerir procesos complejos de reconversión laboral, como lo mencionó una participante, que afirmó que “Sí, yo hago pan, pero por como, por la platita no puede uno puede comprarse un horno. Yo tengo un hornito de barro ahí de horno, sí.” (GF01, 2026).

Los grupos focales también permitieron identificar iniciativas económicas de menor escala que responden a necesidades específicas de las comunidades, como pequeños molinos para la molienda de maíz y pinol, concebidos como negocios familiares complementarios. Aunque este tipo de emprendimientos posee un alcance más reducido, evidencia la capacidad de las mujeres para identificar oportunidades económicas a partir de las dinámicas de consumo locales.

Finalmente, tanto la Vicealcaldía como algunas participantes mencionaron la posibilidad de que futuras inversiones industriales, particularmente en el sector textil, generen nuevas oportunidades de empleo para mujeres migrantes. Esta expectativa se fundamenta en la experiencia previa que muchas mujeres nicaragüenses poseen en maquilas y procesos de manufactura. Esta posibilidad corresponde mayoritariamente a un escenario prospectivo más que a una oportunidad inmediata, sin embargo, posiciona la existencia de un capital humano existente en el territorio, cuya experiencia laboral podría ser aprovechada en caso de desarrollarse nuevas actividades industriales en el cantón. Esto podría plantearse como una posible estrategia de incidencia por parte de las autoridades locales ante el gobierno central para promover el desarrollo económico de la zona.

La evidencia empírica permite concluir que las oportunidades económicas existentes en La Cruz presentan un importante potencial para favorecer la inserción socioeconómica de las mujeres migrantes. Dicho potencial depende principalmente de la capacidad institucional para reducir las barreras que actualmente limitan el acceso de esta población a los sectores ya presentes en el territorio.

4.6 Oferta formativa existente y brechas de capacitación

Las entrevistas realizadas y la información obtenida en los grupos focales muestran que el cantón de La Cruz dispone de una oferta relativamente diversa de programas de formación dirigidos al fortalecimiento de capacidades laborales y productivas. Instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional desarrollan periódicamente cursos y talleres orientados a mejorar la empleabilidad, promover el emprendimiento y fortalecer el ejercicio de derechos. Sin embargo, la evidencia también indica que la existencia de esta oferta no se traduce automáticamente en oportunidades efectivas de capacitación para las mujeres migrantes, debido a la persistencia de múltiples barreras de acceso.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) constituye la principal institución de formación técnica identificada durante el estudio. De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de Apoyo a la Persona Migrante, el instituto ofrece cursos relacionados con manipulación de alimentos, servicio al cliente, atención en hotelería y otras áreas vinculadas con la actividad económica del cantón. No obstante, la mayoría de estos programas exige como requisito mínimo la aprobación

del sexto grado de educación primaria, condición que excluye a una parte importante de las mujeres migrantes participantes, quienes presentan trayectorias educativas interrumpidas o dificultades para certificar formalmente sus estudios realizados en Nicaragua.

Los grupos focales evidenciaron que esta limitación no responde únicamente al nivel educativo alcanzado, sino también a obstáculos administrativos y económicos asociados con la convalidación de estudios, la obtención de documentos y el costo que implica completar procesos educativos pendientes. Como resultado, los requisitos formales terminan restringiendo el acceso precisamente de quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad laboral.

Esto también puede verse reflejado en las estadísticas mismas del INA. De acuerdo con el informe de ejecución de 2025 (INA, 2026), "El INA cuenta con la Política de Atención a la Población en Desventaja Social" que busca priorizar la atención a grupos poblacionales vulnerables, incluyendo de forma explícita a adolescentes embarazadas o madres, mujeres en condición de pobreza y personas migrantes, entre otros. Sin embargo, durante 2025, del total de personas atendidas, solo 11% no habían completado la secundaria, 4.8% fueron migrantes y solo 30% pertenecían a alguna de las poblaciones priorizadas.

Tabla 1. Perfil de población atendida por INA en 2025

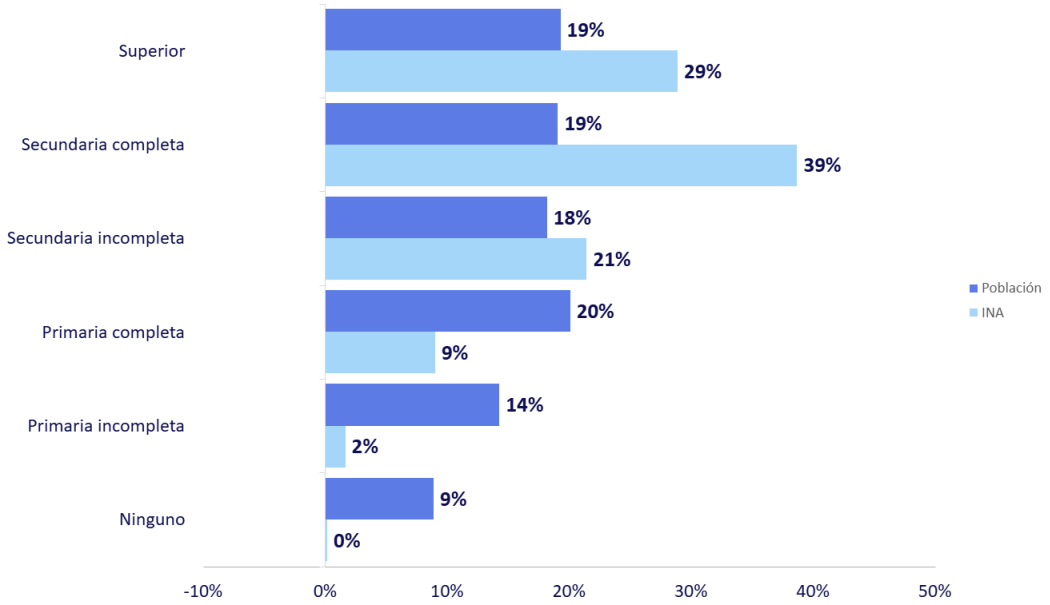
Característica	Población atendida	
	Total	%
Sexo		
Hombres	40,291	42%
Mujeres	55,414	58%
Escolaridad		
Ninguno	175	0.2%
Primaria incompleta	1,602	1.7%
Primaria completa	8,729	9.0%
Secundaria incompleta	20,748	21.5%
Secundaria completa	37,427	38.7%
Superior	27,953.0	28.9%
No especificado	49	0.05%
Provincia de residencia		
Alajuela	22,170	23%
San José	21,992	23%
Puntarenas	13,390	14%
Guanacaste	12,074	12%
Limón	10,656	11%
Heredia	8,294	9%
Cartago	8,107	8%

Fuente: Elaboración propia con datos de INA (2026)

En general, la población atendida por el INA presenta un perfil que difiere del de la población nacional tanto en términos territoriales, como de sexo, condición migratoria y escolaridad (ver tabla 1). Por un lado, se observa una mayor participación relativa de mujeres, quienes representan el 58% de las personas atendidas, frente al 50,4% que representan en la población nacional. Asimismo, Guanacaste concentra el 12% de las personas atendidas por el INA, pese a representar aproximadamente el 8% de la población del país. Esta diferencia es particularmente marcada en el cantón de La Cruz: mientras que su población representa alrededor del 0,54% de la población nacional, las personas residentes en el cantón constituyeron el 2,06% del total de personas atendidas por el INA en 2025 (INEC, 2025; INA, 2026).

En contraste, la población atendida presenta una clara subrepresentación de las personas con menores niveles de escolaridad (ver gráfico 2). Mientras que alrededor del 34% de la población nacional tiene primaria completa o incompleta, esta proporción es de apenas 10,7% entre las personas atendidas por el INA. Asimismo, las personas sin ningún nivel de instrucción representan aproximadamente el 9% de la población nacional, pero apenas el 0,2% de la población atendida. En sentido contrario, las personas con secundaria completa o educación superior representan el 67,6% de la población atendida por el INA, frente a aproximadamente el 38% de la población nacional. De forma similar, los datos poblacionales de 2025 se indica que 9.2% de la población costarricense es migrante, en comparación al 4.8% de personas migrantes atendidas por el INA ese año (INEC, 2025; INA, 2026).

Gráfico 2. Población nacional vs población atendida por INA según nivel de escolaridad



Fuente: Elaboración propia con datos de INA (2026) e INEC (2025)

De este modo, se evidencia que los esfuerzos realizados por el INA por tener en consideración la situación de desventaja en que estas personas se encuentran, no han sido suficientes para alcanzar una cobertura que compense las barreras de acceso asociadas a las responsabilidades de cuidado, la disponibilidad de tiempo, el transporte y la inserción laboral precaria. Si bien existe una participación alta tanto del cantón de La Cruz, como de las mujeres en relación a los hombres, las barreras de exclusión relacionadas a la escolaridad y la condición migratoria continúan dificultando el acceso a estos espacios. Además, es importante mencionar que estos resultados ya incluyen esfuerzos de coordinación interinstitucional con instancias como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) (INA, 2026).

Las participantes de los grupos focales también señalaron la existencia de cursos impulsados por instituciones como el IMAS, Ayuda en Acción, Fundación Mujer y otras organizaciones sobre manipulación de alimentos, servicio al cliente, legislación laboral, empleabilidad, emprendimiento y fortalecimiento de capacidades personales; procesos formativos relacionados con derechos de las mujeres, prevención de la violencia y crianza respetuosa, impartidos por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU); y talleres técnicos sobre producción agrícola, elaboración de abonos orgánicos, horticultura, plomería y pintura desarrollados por otras organizaciones.

Aunque las mujeres valoran positivamente estas iniciativas y muchas de ellas han participado en diversos procesos de capacitación, los grupos focales reflejan una percepción recurrente de discontinuidad y cobertura limitada, como señaló una de las participantes, quien comentó que “me gustaría un poco de lo que es informática, que ahora es tan importante, lo piden para todo, y aunque lo dan en el IMAS, siempre son cupos limitados, cuando uno va, ya no hay, ya no hay, ya no puede.” (GF02, 2026). Otras expresaron la percepción de que el acceso a determinados programas no siempre responde a criterios transparentes. Independientemente de la precisión de estas percepciones, el resultado es una sensación de incertidumbre respecto a las posibilidades reales de acceder a oportunidades formativas.

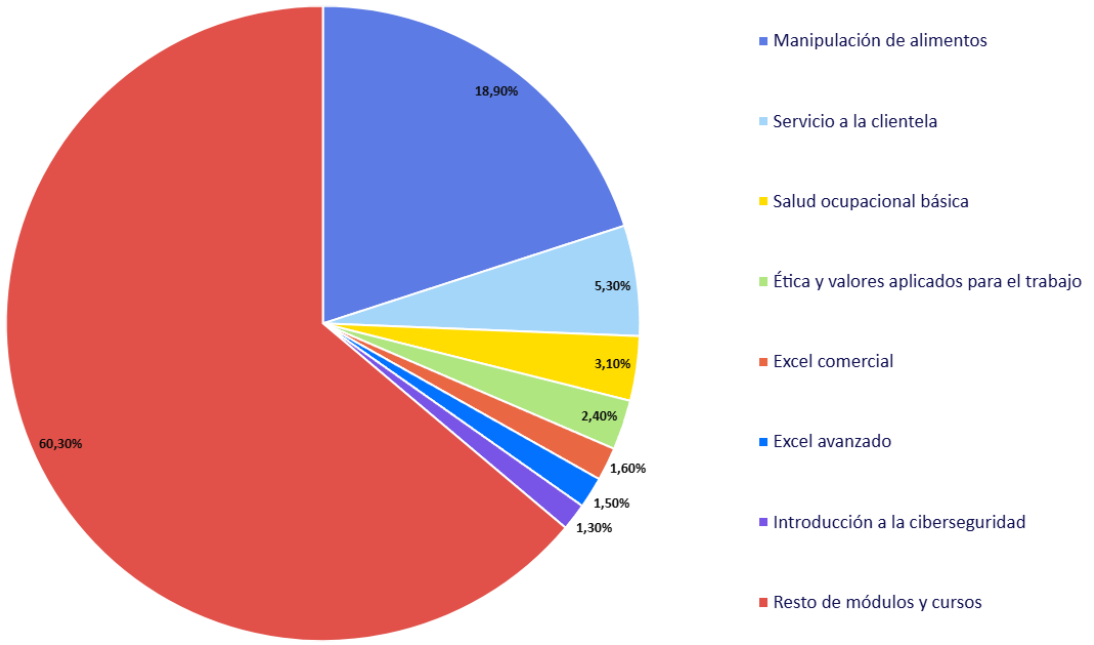
Otro hallazgo relevante es que las modalidades de enseñanza no siempre responden a las condiciones de vida de las participantes. Las mujeres manifestaron preferir la formación presencial para el aprendizaje de oficios prácticos, particularmente en áreas como costura, cocina o repostería, donde consideran indispensable el acompañamiento directo durante el proceso de aprendizaje. En contraste, mostraron mayor disposición hacia modalidades virtuales cuando se trata de contenidos teóricos, legislación laboral, emprendimiento o derechos humanos. Sin embargo, esta alternativa también enfrenta limitaciones derivadas de la conectividad. Las participantes residentes en comunidades rurales señalaron que la cobertura de internet continúa siendo deficiente, lo que dificulta el seguimiento de cursos virtuales,

aun cuando algunas familias han logrado mejorar su acceso mediante antenas inalámbricas o servicios satelitales.

En contraste, de acuerdo con el INA (2026), el 26.7 % de los cursos se desarrolla de manera virtual y, dentro de esta modalidad, el 29.3 % corresponde a cursos de manipulación de alimentos, lo que convierte a esta área en la principal oferta de capacitación virtual. Por tanto, la modalidad en que se concentra una parte importante de la oferta formativa puede constituir, para algunas mujeres del cantón, una barrera adicional de acceso, especialmente cuando se combina con las dificultades de conectividad y las responsabilidades asociadas a sus condiciones de vida.

A pesar de esto, los intereses de capacitación expresados por las participantes muestran una estrecha correspondencia tanto con las oportunidades económicas identificadas en el territorio, como con algunos de los principales cursos ofrecidos por el INA. Entre las áreas de mayor demanda mencionadas por las participantes destacan la repostería, la costura, la informática básica, la atención al cliente, el hotelería, el trabajo como camareras y el aprendizaje de idiomas. Paralelamente, los dos cursos del INA con mayor número de personas inscritas en 2025 fueron manipulación de alimentos y servicio al cliente, además, se desarrollaron también cursos relacionados a la informática, como Excel comercial y avanzado o introducción a la ciberseguridad (Gráfico 3).

Gráfico 3. Matrículas a cursos del INA en 2025 según temática (porcentajes)



Fuente: Elaboración propia con datos de INA (2026)

En conjunto, los hallazgos indican que el principal desafío no radica en la ausencia de oferta formativa, sino en la existencia de una brecha entre los programas disponibles y las condiciones reales de acceso de las mujeres migrantes. Desde esta perspectiva, fortalecer la inclusión socioeconómica de esta población requiere no solo ampliar la cobertura de los procesos de capacitación, sino también revisar sus requisitos de ingreso, adaptar las modalidades de enseñanza a las condiciones del territorio y articular la formación técnica con estrategias de acompañamiento que faciliten la transición hacia el empleo formal o el desarrollo de emprendimientos sostenibles.

4.7 Perspectiva institucionales: redes y actores clave

La institución más importante en la atención y acompañamiento a las personas migrantes han sido la municipalidad de La Cruz, particularmente en los últimos años por medio del Centro Municipal para Migrantes, que nace como parte de los esfuerzos de fortalecimiento institucional impulsados por la OIM, ante el aumento de los flujos migratorios en Costa Rica que surge en el marco de la crisis sociopolítica de Nicaragua lo cual masificó la migración y solicitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica. En 2025, Costa Rica se mantuvo como uno de los principales países anfitriones en las Américas para personas que buscaban protección internacional en relación con su población (alrededor del 4,5%) y al final del año, el país albergaba a unas 233,652 personas que necesitaban protección internacional, la mayoría nicaragüenses (76%) (UNHCR, 2026).

La zona de la frontera norte, cerca de Nicaragua, fue una de las zonas de tránsito más recurrente, tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) han realizado varios reportes que dan cuenta de este fenómeno de movilidad humana.

Como parte de estos esfuerzos la OIM documentó en su reporte *Monitoreo del flujo circular migratorio de personas nicaragüenses: Cantones La Cruz, Upala y Los Chiles* se registra que entre el 01 y el 30 de junio de 2024 se produjeron 7,786 ingresos regulares, es decir 260 personas por día y 7,296 egresos irregulares, 243 por día en la Cruz, Upala y los Chiles de personas nicaragüenses (OIM, 2024). En este mismo período también se identifican 22,228 ingresos regulares y 19,621 ingresos en los puestos oficiales de Peñas Blancas y Las Tablillas (DGME, 2024, citado en OIM, 2024).

Los movimientos migratorios de personas nicaragüenses hacia Costa Rica son una tendencia constante en América Central, intensificándose por factores políticos, económicos y sociales. Estos movimientos representan desafíos continuos para ambos países en la búsqueda de respuestas en materia de políticas migratorias, que incluyan soluciones en empleo, educación, acceso a servicios básicos, entre otros (OIM, 2024).

Considerando el contexto de cantones fronterizos como La Cruz, la creación del Centro Municipal para Migrantes ha sido central para la gestión y acompañamiento migratorito. El Centro Municipal para Migrantes se encarga de brindar asesoría migratoria gratuita, ofrecer información sobre requisitos para residencia, apoyar en llamadas a migración para citas de refugio o residencia, y referir a personas a otras instituciones como CCSS o PANI (Aguilar y Barberena, 2025).

El CMM de La Cruz enfrenta grandes desafíos como tener a una sola persona a cargo del CMM lo cual representa una sobrecarga de trabajo en relación con las necesidades locales. Parte de la capacidad de respuesta de la Municipalidad ha sido crear alianza con diferentes entidades como la OIM quién brindó apoyo técnico para acompañar y dar asistencia a las necesidades de la población migrante que habita en el cantón. Adicionalmente, existe un comité comunal que responde cuando hay alguna situación en la que puedan apoyar, compuesto por personas habitantes de la misma comunidad (Aguilar y Barberena, 2025).

4.7.1 Instituciones locales La Cruz

Algunas de las instituciones que se encuentran en la Municipalidad que son claves para en el apoyo y cobertura de las necesidades de la población migrante son la Casa Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).

La CCSS ha sido una institución clave gracias a la apertura de establecer convenios de colaboración con ACNUR que permitan dar cobertura a las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado al sistema de salud pública del país. En diciembre de 2019 ACNUR firmó el primer convenio que permitía dar cobertura a 6,000.00 personas, dicho convenio entró en vigor en 2020 (ACNUR, 2019), posteriormente fue ampliado a 10,000 personas incluyendo a 4,000 personas beneficiarias más para el año 2021 (ACNUR, 2021).

En 2022 y 2023, las condiciones presupuestarias permitían mantener el beneficio a un total de 6.000 personas hasta el 31 de diciembre del 2023. Con el nuevo convenio y ampliación, este número se extendió a 9.775 (Semanario Universidad, 2023). Mientras que para el 2025, el convenió brindó cobertura a 4,300 personas solicitantes y refugiadas (Articulo 66, 2025). Para el 2026 el número de cobertura disminuyó considerablemente a 600 personas beneficiarias (ACNUR, 2026), representa solo el 10% de la cobertura del primer convenio.

Es clave comprender el contexto nacional bajo el cual operan instituciones como la CCSS para poder acceder a estas mismas a nivel local, en el caso de La Cruz han tenido un papel importante, por medio de la Centro Municipal para Migrante las personas que accedían a asesoría podían obtener información respecto a cómo acceder a este tipo de seguros médicos.

A nivel local, el PANI ha sido una de las instituciones que ha permitido establecer coordinación directa con la Municipalidad de La Cruz, en una de las entrevistas la persona funcionaria mencionó que *"El PANI refería casos de familias que iban nen transito con menores de edad sin documentación, para que la CMM pudiera brindarles asesoría migratoria para regularizarse"* (ENT01,2026).

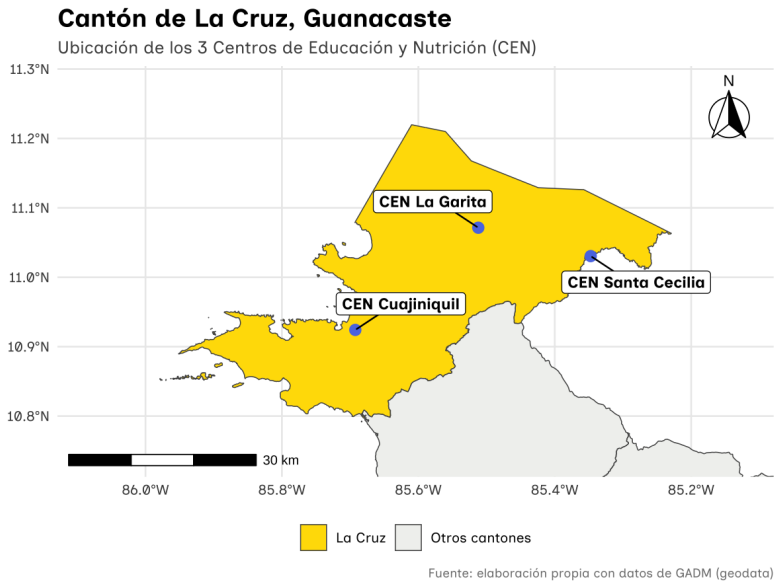
Una de las institucionales aliadas a nivel local ha sido el MEP, se mencionó que *"han realizado realizaban jornadas informativas y charlas en las escuelas para que se conociera el trabajo del Centro Municipal para Migrantes, que existía y podían acercarse"* (ENT01,2026). Este tipo de jornadas permiten a las familias tener acceso a información sobre los centros a los cuáles pueden recurrir por asesoría migratoria.

Así mismo del CEN-CINAI son clave para los cuidados de las infancias migrantes, estos se encuentran bajo la unidad del Ministerio de Salud dentro de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) operan bajo tres tipos de establecimientos: el CEN (Centro de Educación y Nutrición), que brinda atención y protección infantil hasta por 8 horas diarias más alimentación complementaria para embarazadas y lactantes; el CINAI (Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral), que ofrece el mismo tipo de servicios pero con jornada extendida de hasta 12 horas diarias, dirigido a hijos de madres trabajadoras; y el CENCE (Centro de Educación y Nutrición y Comedor Escolar), que funciona hasta 8 horas diarias y suma un servicio de comidas para escolares que no cuentan con alimentación en sus escuelas. Los tres están dirigidos a la niñez menor de 13 años, con prioridad para familias en condición de pobreza o riesgo social (CEN-CINAI, s.f).

A nivel local, en el cantón de La Cruz existen 3 sedes de Centros de Educación y Nutrición (CEN): Santa Cecilia, La Garita y Cuajiniquil. Si bien el cantón cuenta con estos tres centros, y la normativa de CEN-CINAI establece que el servicio debe atender a niñas y niños menores de 13 años, tanto nacionales como extranjeros, en la práctica las mujeres migrantes siguen enfrentando limitantes para acceder a dicho sistema.

Los 3 centros (Santa Cecilia, La Garita y Cuajiniquil) se ubican en distritos distintos y notablemente distantes entre sí, con separaciones de entre 18 y 40 km en línea recta. Esta dispersión, en un cantón extenso y de baja densidad poblacional, genera una brecha territorial que limita el acceso de las comunidades más alejadas a los servicios brindados por el CEN, como se muestra en el gráfico 4.

Gráfico 4. Ubicación de los Centros de Educación y Nutrición (CEN)



El procedimiento de ingreso a CEN-CINAI consiste, en solicitar una cita en el establecimiento más cercano de forma presencial o telefónica para una entrevista, en la cual el padre, madre, tutor o persona encargada debe presentar el documento de identificación y el carné de desarrollo de la niña o el niño (o, en el caso de adolescentes madres y mujeres embarazadas o lactantes, su documento de identificación y el carné de control prenatal). A partir de esa entrevista, el equipo técnico aplica un sistema de puntaje que prioriza a las familias según cuatro criterios: ambiente socioeconómico, ambiente educativo, salud y tipo de hogar (embarazo adolescente, hijos de madres adolescentes, entre otros) (CEN-CINAI,s.f).

Institucionalmente el procedimiento no contempla que se evalúa la nacionalidad o el estatus migratorio de la familia solicitante. Sin embargo, una de las participantes de los grupos focales señala que ha tenido dificultades respecto al cuidado *"aunque anteriormente recibí apoyo de instituciones como el IMAS para el cuido, actualmente tengo pendiente mi trámite de regularización"* (GF03,2026).

En ese sentido, es necesario mejorar el acceso a la información para las mujeres migrantes y refugiadas, de forma que puedan tener claridad respecto a los requisitos de ingreso al Sistema Nacional de Cuido y como interponer quejas en los casos que corresponda ya que adicional a la vulnerabilidad socioeconómica también es una barrera identificada la falta de redes de apoyo como familia y amigos que puedan representar un soporte para las tareas del cuidado. En el tercer grupo focal señalaron que, al no contar con una red de apoyo familiar en la localidad, les resulta sumamente difícil encontrar a alguien responsable para el cuido. Esto las ha llevado a abandonar empleos, ya que el costo de los servicios de cuido privado supera los ingresos percibidos (GF03,2026).

4.7.2 Derivaciones a otros cantones

Por otro lado, aunque no está en el mismo cantón las oficinas de INAMU y de IMAS que se encuentra en Liberia brindan apoyo al cantón de La Cruz por medio de derivaciones de atención relacionadas a las funciones de dichas instituciones.

En la entrevista ENT01 se mencionó que “Al IMAS se hacían consultas si a una persona migrante se podía dar ayuda y si cumplía con los requisitos”. Dicha entidad se encargada en este caso en particular de avalorar la situación de las personas migrante para saber si pueden acceder a beneficios económicos, subsidios y programas de cuido, aunque su sede principal se encuentra en Liberia.

En la entrevista ENT01 se menciona que “en años anteriores la oficina de la CMM era parte de la Comisión Migrante que generalmente se reunía en Liberia, en donde se sumaban instituciones de como el INAMU para realizar ferias sobre derechos y deberes de las personas migrantes”. Este tipo de colaboraciones interinstitucionales y entre cantones permite fortalecer la capacidad local en el manejo de la migración sobre todo en zonas fronterizas que tienen altos índices de migración por lo cual es necesario garantizar información adecuada sobre los procesos migratorios, especial desde el ingreso a Costa Rica.

4.7.3 Actores internacionales

La Embajada de Francia es un actor clave en la gestión local actual, ya que representa una de las principales fuentes de financiamiento para diversos proyectos de migración a través de su programa "Apoyo a la integración de mujeres y niñas migrantes en la sociedad costarricense", el cual comprende varios proyectos que cubren zonas fronterizas.

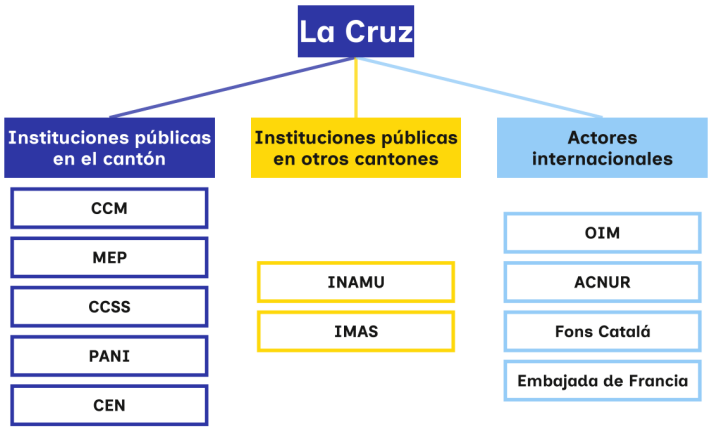
Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha desempeñado un papel fundamental en la atención de personas migrantes, con impactos concretos a nivel local; como se mencionó anteriormente, fue esta organización la que apoyó la apertura del CMM en La Cruz (Aguilar y Barberena, 2025).

Por su parte, ACNUR ha tenido un rol igualmente central, en particular en el caso nicaragüense, que representa una de las principales oleadas de personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica.

Finalmente, el Fons Catalá[1] como actor internacional ha sido importante en la a nivel local particularmente en el último año, gracias a su amplia experiencia estableciendo alianzas locales alrededor del mundo para potenciar capacidades territoriales. Cuenta con trayectoria propia, desde los ayuntamientos, en la implementación de planes de integración local. En 2025 contribuyó el estudio *Marco normativo y político de las migraciones, la acogida y las dinámicas de movilidad humana en Costa Rica*, que retomó experiencias de población migrante en Upala y La Cruz. Este estudio fue financiado por el Fons y elaborado por la Fundación Sin Límites, con el objetivo de comprender mejor la realidad nacional y local, y así aportar mediante capacitaciones a funcionarios y la elaboración de planes a nivel local. Este año, además, han realizado una convocatoria pública dirigida precisamente a este tipo de trabajo[2].

El siguiente gráfico sintetiza la presencia institucional y organizacional en el cantón de La Cruz, clasificada en tres categorías instituciones locales, presentes directamente en el territorio, instituciones de otros cantones, hacia las cuales se realizan derivaciones principalmente Liberia, y organizaciones internacionales, cuya participación se ha centrado fundamentalmente en el apoyo técnico y financiero a los procesos de gestión migratoria local.

Gráfico 5. Principales actores con presencia en La Cruz-Guanacaste



Fuente: Elaboración propia

1 El Fondo Catalán es una organización compuesta por más de 300 ayuntamientos y otras entidades supralocales que destinan parte de su presupuesto para financiar la cooperación para el desarrollo y acciones de solidaridad internacional en todo el mundo. https://fonscatala.org/el-fons/

2 Contratación de una consultoría para la elaboración y actualización de los Planes Locales de acogida para población migrante y refugiada en los municipios de Upala y La Cruz (Costa Rica). https://fonscatala.org/es/contratacion-de-una-consultoria-para-la-elaboracion-y-actualizacion-de-los-planes-locales-de-acogida-para-poblacion-migrante-y-refugiada-en-los-municipios-de-upala-y-la-cruz-costa-rica/

4.7.4 Alianzas interinstitucionales

El panorama descrito permite advertir que la respuesta institucional a la migración en el cantón de La Cruz se sostiene sobre una base estructuralmente limitada: la atención directa recae en una única persona funcionaria a cargo del Centro Municipal para Migrantes (CMM), los servicios de cuido infantil se encuentran dispersos territorialmente como ilustra la distribución de los CEN, y trámites de relevancia como el acceso a la seguridad social o a beneficios socioeconómicos dependen de derivaciones hacia cantones vecinos, particularmente Liberia.

Esta fragmentación institucional evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, incorporando de manera sustantiva al sector privado como actor corresponsable en la gestión migratoria local. El tejido empresarial de la zona vinculado principalmente al comercio, la agricultura y las dinámicas de movilidad fronteriza posee un potencial considerable para complementar la oferta pública existente, ya sea mediante la generación de empleo formal dirigido a mujeres migrantes, la implementación de esquemas laborales que faciliten la conciliación entre el trabajo remunerado y las tareas de cuido, o el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social empresarial orientadas al financiamiento de servicios comunitarios de cuido infantil en los distritos con menor cobertura.

La ausencia actual de este actor en la arquitectura institucional de atención constituye una oportunidad desaprovechada, en particular si se considera que una de las principales barreras señaladas por las participantes de los grupos focales fue la pérdida de fuentes de empleo derivada de la imposibilidad de costear servicios de cuido privado (GF03, 2026).

De manera complementaria, resulta necesario reconocer y consolidar el papel de la sociedad civil como actor central dentro de la gestión migratoria local, trascendiendo la función actualmente desempeñada por el comité comunal. Las organizaciones de base, los colectivos de mujeres y las redes comunitarias tienen la capacidad de constituirse en un puente efectivo entre la institucionalidad formal y la población migrante, atendiendo precisamente aquella carencia identificada de manera recurrente por las mujeres participantes: la ausencia de redes de apoyo familiar y social en el territorio de acogida.

El fortalecimiento de estas organizaciones mediante procesos de capacitación, acompañamiento técnico y financiamiento canalizado a través de actores de cooperación internacional permitiría el desarrollo de mecanismos comunitarios de cuido, difusión de información pertinente y acompañamiento cercano a la población migrante. Ello contribuiría, asimismo, a reducir la dependencia excesiva respecto de una institucionalidad pública que, como se ha documentado, opera con recursos

humanos y presupuestarios limitados en contextos fronterizos como el del cantón de La Cruz.

Costa Rica anteriormente ha tenido experiencias enriquecedoras a nivel local que han permitido atender las necesidades de cuidado de la población migrante y de la niñez en particular. Un ejemplo de ello son las Casas de la Alegría como un antecedente positivo. Surgieron como parte de una iniciativa binacional impulsada por UNICEF con el fin de proteger los derechos humanos de la niñez y erradicar el trabajo infantil, dirigida específicamente a los hijos e hijas de miles de personas de la comarca indígena Ngäbe-Buglé que se trasladan desde Panamá hacia territorio costarricense principalmente al cantón de Coto Brus y permanecen ahí cerca de seis meses durante la temporada de cosecha de café, antes de regresar a su lugar de origen (Dirección Nacional de CEN-CINAI, 2021, p. 37)

Estos establecimientos resolvieron la situación de riesgo a la que estaban expuestos estos niños y niñas, quienes antes pasaban largas horas dentro de los cafetales e incluso realizaban trabajo junto a sus familias. CEN-CINAI se sumó al proyecto aportando experiencia técnica y personal en las fincas cafetaleras donde se instalaron las Casas de la Alegría, en articulación con otras instituciones como la CCSS, el IMAS, el PANI, la Municipalidad de Coto Brus y Coopesabalito, y contó además con el aporte financiero de la Embajada de Japón (US$85.750) para la construcción y remodelación de un CEN-CINAI (Dirección Nacional de CEN-CINAI, 2021, p. 37).

5. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- La inserción económica de las mujeres migrantes en La Cruz responde a una segmentación del mercado de trabajo local que las confina a un rango acotado de actividades servicio doméstico, hotelería, agricultura estacional y venta informal de alimentos. Esta segmentación obedece a la irregularidad migratoria que condiciona el acceso al empleo asalariado formal; el costo de la regularización y acceso a préstamos. A su vez, la carga de cuido no remunerado es una de las restricciones más presentes e invisibilizada a nivel institucionalmente.
- Las mujeres migrantes de La Cruz poseen capacidades productivas elaboración de alimentos tradicionales nicaragüenses, costura, redes locales comerciales, y competencias digitales básicas que constituyen una base para el desarrollo de emprendimientos.
- El cantón de La Cruz, cuenta con sectores con potencial de generación de empleo para mujeres migrantes, particularmente el turismo, la agricultura estacional y los pequeños emprendimientos de comida típica nicaragüense debido a la cercanía con el cantón.
- Aunque La Cruz dispone de una oferta formativa liderada por el INA junto con esta no logra traducirse en oportunidades efectivas de capacitación para las mujeres migrantes debido a requisitos de escolaridad que puede ser excluyentes y modalidades de enseñanza poco adaptadas a las condiciones del territorio. Como resultado, la población migrante y de menor escolaridad continúa subrepresentada en estos programas.
- La atención a la población migrante en La Cruz descansa sobre una arquitectura institucional que se encuentra sobrecargada a nivel local, las instituciones locales (CCSS, MEP, PANI, CEN-CINAI) ofrecen puntos de apoyo, pero tienen limitantes de cobertura y alcance. Los actores internacionales han sido decisivos para suplir estos vacíos mediante financiamiento y apoyo técnico.

Recomendaciones

1: Promover modelos de emprendimiento colectivo entre mujeres migrantes: La Municipalidad de La Cruz, en coordinación con actores de cooperación internacional, debe impulsar la conformación de al menos una asociación o cooperativa de mujeres migrantes emprendedoras (priorizando el sector de alimentos), facilitando su formalización ante el Ministerio de Salud y la propia Municipalidad, y promoviendo dentro de esta figura un sistema espacios que permita compartir costos de infraestructura y alternar las labores de producción y venta con las responsabilidades de cuido.

2. Adecuar la oferta formativa a la realidad de las mujeres migrantes: El INA debe revisar los requisitos de ingreso relacionados con la escolaridad formal e incorporar cursos modulares, certificaciones por competencias y programas de nivelación educativa que permitan el acceso progresivo de mujeres con bajos niveles educativos; de manera complementaria.

El INA, la Municipalidad y las organizaciones de cooperación, en articulación con el INAMU, deben incorporar de manera transversal en los programas de formación técnica dirigidos a mujeres migrantes módulos de habilidades socioemocionales, liderazgo y autonomía económica, replicando el enfoque ya desarrollado por el INAMU cuyos resultados muestran mayor comunicación, liderazgo e iniciativa entre las participantes.

4. Fortalecer el rol de la sociedad civil y las instituciones locales: Establecer alianzas entre las organizaciones de sociedad civil (OSC) que trabajan en la zona, de modo que puedan coordinar sus intervenciones y evitar la duplicación de esfuerzos. Asimismo, se recomienda que estas organizaciones fortalezcan sus vínculos con las instituciones locales, de manera que las intervenciones dirigidas a la población migrante especialmente mujeres y niñas, logren mayor articulación, sostenibilidad e impacto en el territorio.

Fortalecer y dar continuidad presupuestaria a la oficina municipal de atención a la población migrante, ampliando su función más allá de la orientación inicial hacia el acompañamiento en la ruta de regularización migratoria y la vinculación activa con la oferta formativa del INA. Así mismo, se recomienda desarrollar una encuesta de caracterización socioeconómica de la población migrante en el cantón, que permita cuantificar y dimensionar los hallazgos cualitativos.

5. Incorporar al sector privado como actor en la gestión migratoria del cantón: Dado que la atención institucional depende actualmente de una sola persona funcionaria en el CMM y de derivaciones hacia Liberia, se recomienda que la Municipalidad de La Cruz, junto con las instituciones locales (MEP, CCSS, PANI, CEN), promueva alianzas formales con el tejido empresarial vinculado al comercio, la agricultura y la dinámica fronteriza. Principalmente fomentar mayores alianzas con la Asociación Cámara de Desarrollo del Comercio y Turismo de La Cruz (ASCATUR).

Referencias

ACNUR. (2019). 6.000 solicitantes de la condición de refugiado serán inscritos en el sistema de salud pública en Costa Rica. Comunicado de Prensa. https://www.acnur.org/noticias/comunicados-de-prensa/6000-solicitantes-de-la-condicion-de-refugiado-seran-inscritos-en-el

ACNUR. (2021). Costa Rica y ACNUR extienden seguro médico a 10.000 refugiados y solicitantes de la condición de refugiado. Comunicado de Prensa. https://www.acnur.org/noticias/comunicados-de-prensa/costa-rica-y-acnur-extienden-seguro-medico-10000-refugiados-y

ACNUR. (2026). Annual results report 2025: Costa Rica. https://www.unhcr.org/sites/default/files/2026-06/unhcr-annual-results-report-2025-costa-rica.pdf

Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2024). *¿Qué tan incluida financieramente está la población migrante en América Latina y el Caribe?* https://www.caf.com/es/blog/que-tan-incluida-financieramente-esta-la-poblacion-migrante-en-america-latina-y-el-caribe/

Aguilar Aguilar, A. V., y Barberena, J. D. (2025). Marco normativo y político de las migraciones, la acogida y las dinámicas de movilidad humana en Costa Rica. Fundación Sin Límites para el Desarrollo Humano. https://fsinlimites.com/2025/11/30/marco-normativo-migraciones-costa-rica

Articulo 66. (2025). ACNUR amplia un año más de seguro médico a migrantes nicaragüenses en Costa Rica. https://www.articulo66.com/2025/01/15/acnur-amplia-ano-seguro-medico-a-migrantes-nicaraguenses-costa-rica/

Banco Central de Costa Rica. (s. f.). Indicadores económicos de Costa Rica: Reporte 1193. Sistema de Divulgación de Datos. Recuperado el 19 de agosto de 2026, de https://sdd.bccr.fi.cr/es/IndicadoresEconomicos/Inicio/Reporte/1193

Calle García, A. J. (2026). Emprendimiento migrante y capital social en comunidades receptoras. Innovación Integral, 3(2), 1296-1318. https://doi.org/10.70577/vrtd3d60

Carcedo, A., Lexartza, L., y Chaves-Groh, M. J. (2011). Cadenas globales de cuidados: El papel de las migrantes nicaragüenses en la provisión de cuidados en Costa Rica. ONU Mujeres. https://formatos.inamu.go.cr/SIDOC/archivosLibros/cadenas_costarica_636401140318427618.pdf

Consejo de Promoción de la Competitividad [CPC]. (s.f.). Índice de Competitividad Nacional (ICN): Perfil cantonal de La Cruz. Recuperado el 11 de agosto de 2026, de https://icn.cr/

CEN-CINAI. (s.f). Tipos de Centros. https://www.cen-cinai.go.cr/tipos-de-establecimientos/

CEN-CINAI. (2021). CEN-CINAI: 70 años creciendo con la niñez y las familias de Costa Rica. Ministerio de Salud de Costa Rica. https://www.cen-cinai.go.cr/wp-content/uploads/2022/05/70_aniversario_CEN-CINAI_01_de_octubre_2021.pdf

CEN-CINAI. (s.f.). Selección de hogares CEN-CINAI: Procedimientos oficiales. https://www.cen-cinai.go.cr/wp-content/uploads/2022/05/Presentacin_Seleccin_de_Hogares_CEN-CINAI_Procedimientos_oficiales.pdf

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. (2026). *Inclusión financiera de las mujeres en Centroamérica: experiencias desde el sector financiero*. https://lac.unwomen.org/es/digital-library/publications/2026/04/inclusion-financiera-de-las-mujeres-en-centroamerica-experiencias-desde-el-sector-financiero

Esquivel, V. (Ed.). (2012). La economía feminista desde América Latina: Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. ONU Mujeres. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2012/6/la-economia-feminista-desde-america-latina

Fernández-Fernández, A. L., Voorend, K., Gatica-López, G., Contreras-Guzmán, J., Solano-Chavarría, V., Alvarado-Abarca, D., Ferris-Dobles, M., y Azofeifa-Ramos, S. (2024). Corredores migratorios de cuidados: informalidad laboral y feminización de la pobreza en Costa Rica. Notas de Coyuntura Migratoria No. 3, año 4. CICDE-UNED.https://cicde.uned.ac.cr/images/cicde/recursos/Notas_de_Coyuntura_Migratoria_No_3_2024.pdf

Fernández-Fernández, A. L. (2021). Solución inmediata a una crisis. Mujeres nicaragüenses que asumen el trabajo de los cuidados en Costa Rica. Revista Rupturas. https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/article/view/3394

Forni, Pablo, y Grande, Pablo De. (2020). Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales contemporáneas. Revista mexicana de sociología, 82(1), 159-189. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032020000100159

Gatica López, G. A. (2026). (Des) cuidando a las que cuidan: el olvido en Costa Rica a mujeres migrantes ocupadas en trabajos de cuidados y trabajo doméstico remunerado. Revista Rupturas, 16(1), 77–112. https://doi.org/10.22458/rr.v16i1.6373

Hernández-Sampieri, R, y Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill Education. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/SampieriLasRutas.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2022. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-06/reENUT2022_0.pdf

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). (2026). INA en Cifras 2025. Costa Rica. https://www.ina.ac.cr/transparencia/SitePages/PlanificacionInstitucional.aspx

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2023). XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2022: Población ocupada por cantón y rama de actividad económica. San José, Costa Rica: INEC. https://inec.cr/

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2025). Encuesta Nacional de Hogares 2025 (ENAHO 2025). Costa Rica. https://sistemas.inec.cr/nada5.4/index.php/catalog/373

Instituto Mixto de Ayuda Social e Instituto Nacional de las Mujeres. (2021). Política Nacional de Cuidados 2021-2031: Hacia la implementación progresiva de un Sistema de Apoyo a los Cuidados y Atención a la Dependencia.

https://www.imas.go.cr/sites/default/files/custom/Politica%20Nacional%20de%20Cuidados%202021-2031_0.pdf

Instituto Mixto de Ayuda Social. (2024). Atlas de desarrollo humano cantonal refleja condiciones desiguales para costas y fronteras. https://www.imas.go.cr/es/semanario/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal-refleja-condiciones-desiguales-para-costas-y

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2024). Mideplan presenta el Índice de Desarrollo Social 2023 para distritos y cantones del país. https://www.mideplan.go.cr/mideplan-presenta-el-indice-de-desarrollo-social-2023-para-distritos-y-cantones-del-pais

Presidencia de la República de Costa Rica. (2015, 23 de enero). Presidenta de la República en ejercicio inaugura hotel que generará 600 empleos directos. https://presidencia.gobiernocarlosalvarado.cr/comunicados/2015/01/226-presidenta-de-la-republica-en-ejercicio-inaugura-hotel-que-generara-600-empleos-directos/

Rodríguez Enríquez, C. (2012). La cuestión del cuidado: ¿El eslabón perdido del análisis económico? Revista CEPAL, (106), 23-36. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11524

Rodríguez Enríquez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. Nueva Sociedad, (256), 30-44. https://nuso.org/articulo/economia-feminista-y-economia-del-cuidado-aportes-conceptuales-para-el-estudio-de-la-desigualdad/

Rodríguez Garcés, C. R., Padilla Fuentes, G. B., y Valenzuela Orrego, M. A. (2019). La inactividad laboral como invisibilización del trabajo femenino: aportes a la nueva cartografía del mercado laboral rural en Chile. Cuadernos de Desarrollo Rural, 16(83). https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/23241

Semanario Universidad. (2023). Amplían convenio para que CCSS atienda 9.775 personas refugiadas en 2023 y 2024. https://semanariouniversidad.com/pais/amplian-convenio-para-que-ccss-atienda-9-775-personas-refugiadas-en-2023-y-2024/

Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, Universidad de Costa Rica. (2017). Un acercamiento a la brecha digital de género en Costa Rica. https://www.micitt.go.cr/sites/default/files/publicaciones/estudio/un-acercamiento-a-la-brecha-digital-de-genero.pdf

Municipalidad de La Cruz. (2017). Plan cantonal de desarrollo humano local de La Cruz 2017-2026. https://www.munilacruz.go.cr/images/La_Cruz/Plan_cantonal_de_desarrollo_Humano.pdf

Municipalidad de La Cruz. (2021). Informe de rendición de cuentas: Período 2021. https://www.munilacruz.go.cr/images/La_Cruz/informe-rendicin-de-cuentas-periodo-2021-la-cruz.pdf

Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press. https://genderbudgeting.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/12/nussbaum_women_capabilityapproach2000.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2002). Women and men in the informal economy: A statistical picture.

Organización Internacional del Trabajo. (2026). Trabajadores domésticos. https://www.ilo.org/es/temas-y-sectores/trabajadores-domesticos

Organización Internacional para las Migraciones. (2024). Monitoreo del flujo circular migratorio de personas nicaragüenses: Cantones La Cruz, Upala y Los Chiles. https://share.google/vaRGuzxgllvtvBeAk

Solé, C., y Parella, S. (2005). Negocios étnicos: Los comercios de los inmigrantes no comunitarios en Cataluña. Fundación CIDOB.

Valenzuela, M. E., y Scuro, M. L. (2020). Desigualdad, crisis de los cuidados y migración del trabajo doméstico remunerado en América Latina. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46537

Vásconez, A. (2012). Reflexiones sobre economía feminista, enfoques de análisis y metodologías: aplicaciones relevantes para América Latina. En V. Esquivel (Ed.), La economía feminista desde América Latina: Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región (pp. 98–140). ONU Mujeres. https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2012/6/la-economia-feminista-desde-america-latina



Fundación Sin Límites

SERIE DE ANÁLISIS SOCIAL